Señores,

**JUZGADO ONCE (11) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

**Demandante:** OMAR BECERRA LIBREROS

**Demandados:** FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA Y OTROS

**Llamado en G:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC

**Radicado:** 76001 31 05 011 2023-00234-00

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116. del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado judicial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, conforme al poder otorgado, manifiesto que mediante el presente libelo y dentro del término legal, respetuosamente procedo a contestar la demanda impetrada por el señor OMAR BECERRA LIBREROS en contra de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA, PORVENIR S.A., MUNICIPIO DE JAMUNDÍ-VALLE e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- en adelante ICBF y, en **segundo lugar**, a pronunciarme frente al llamamiento en garantía formulado por esta última entidad a mi representada, en los siguientes términos:

**CAPÍTULO I.**

**I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**Frente al hecho 1**: **NO ME CONSTA** que el demandante prestó sus servicios personales para la FUNDACIÓN PRODESARROLLO mediante contrato a término indefinido en las fechas indicadas, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 2: NO ME CONSTA** el cargo para el cual fue contratado el señor OMAR BECERRA, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 3: NO ME CONSTA** las funciones ejecutadas por el señor BECERRA como jefe de bodega, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

**Frente al hecho 4:** **NO ME CONSTA** el horario en el cual desarrollaba las funciones el demandante, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

**Frente al hecho 5: NO ME CONSTA** que el demandante recibiera órdenes del representante legal de la empresa, ni que debía informar y reportar sus actividades al señor Alex Mauricio, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 6: NO ME CONSTA** el salario devengado por el señor BECERRA, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 7:** **NO ME CONSTA** que la FUNDACIÓN PRODESARROLLO descontó de la asignación mensual el valor por aportes a la seguridad social, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 8:** **NO ME CONSTA** lo indicado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 9:** **NO ME CONSTA** que la FUNDACIÓN PRODESARROLLO a través de COLABOREMOS CTA pagó aportes a seguridad social al demandante, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 10:** **NO ME CONSTA** lo referenciado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 11:** **NO ME CONSTA** lo indicado en el certificado de aportes a la seguridad social en el periodo de diciembre de 2012, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 12:** **NO ME CONSTA** la FUNDACIÓN PRODESARROLLO omitió el pago de aportes a pensión a favor del actor, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 13:** **NO ME CONSTA** la AFP PORVENIR S.A. no cumplió con su obligación de requerir y ejercer acciones de cobro, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 14:** **NO ME CONSTA** el accidente de tránsito que sufrió el señor BECERRA, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 15:** **NO ME CONSTA** las incapacidades referenciadas ni el estado de salud del actor, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 16:** **NO ME CONSTA** lo relatado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 17:** **NO ME CONSTA** la EPS SOS emitió un concepto de rehabilitación, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 18:** **NO ME CONSTA** lo narrado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 19:** **NO ME CONSTA** que el 27/11/2012 el actor fue presionado para firmar terminación por mutuo acuerdo, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 20:** **NO ME CONSTA** que las conductas no tuvieron previamente diligencia de descargos o denuncia penal que acreditara la comisión de las mismas, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 21:** **NO ME CONSTA** lo narrado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 22:** **NO ME CONSTA por cuanto NO ES UN HECHO,** lo expresado en el presente numeral, obedece a una apreciación subjetiva sobre la ineficacia del acuerdo en mención, la cual resulta inviable calificar afirmativa o negativamente, motivo por el cual, esto debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 23:** **NO ME CONSTA** que el acuerdo conciliatorio aludido haya sido celebrado bajo amenazas y en estado de incapacidad, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 24:** **NO ME CONSTA** que el representante legal de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO no solicitó autorización a la Inspección del Trabajo, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 25:** **NO ME CONSTA** lo indicado en el oficio del 30/10/2013 dirigido a la AFP PORVENIR S.A. por parte de la EPS SOS, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 26:** **NO ME CONSTA** lo resuelto en el dictamen de perdida de la capacidad laboral realizada el 04/10/2017, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 27:** **NO ME CONSTA** la notificación realizada al señor BECERRA sobre el dictamen de perdida de la capacidad laboral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 28:** **NO ME CONSTA** que el 20/03/2018 a la AFP PORVENIR se le notificó la firmeza del dictamen, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 29:** **NO ME CONSTA** que mediante oficio CD2 13242 del 15/03/2018 a la AFP PORVENIR se le notificó la firmeza del dictamen, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 30:** **NO ME CONSTA** que la Coordinación de Incapacidades y Valoración de la AFP PORVENIR solicitó la ratificación del dictamen, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 31:** **NO ME CONSTA** que el 31/08/2018 la EPS SOS mediante comunicación CD2 103489 informó a Seguros Alfa la calificación de PCL, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 32:** **NO ME CONSTA** que Seguros de Vida Alfa S.A. presentó recurso de reposición en subsidio apelación del dictamen, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 33:** **NO ME CONSTA** lo referenciado en el Oficio referenciado, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 34:** **NO ME CONSTA** que el actor presentó solicitud de pensión de invalidez el 19/08/2021, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 35:** **NO ME CONSTA** la acción de tutela presentada por el demandante contra PORVENIR S.A., por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 36:** **NO ME CONSTA** que el actor radicó ante PORVENIR S.A. los documentos para reclamar la pensión de invalidez, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 37:** **NO ME CONSTA** la respuesta emitida por PORVENIR S.A., por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 38:** **NO ME CONSTA** lo narrado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 39:** **NO ME CONSTA** que el señor BECERRA cumpla con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 40:** **NO ME CONSTA** la petición elevada a la EPS SOS, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 41:** **NO ME CONSTA** la acción de tutela presentada en contra de la EPS SOS, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 42:** **NO ME CONSTA** lo indicado en el presente numeral, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 43:** **NO ME CONSTA** que la FUNDACIÓN PRODESARROLLO suscribió contrato de servicios profesionales con el municipio de Santiago de Cali ni el objeto de los mismos, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**Frente al hecho 44:** **NO ME CONSTA** que el Municipio de Jamundí y el ICBF sean solidariamente responsables de las pretensiones incoadas, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a la totalidad de las pretensiones de la demanda, en la medida en que comprometan la responsabilidad de mi procurada y exceden la posibilidad de afectación y el ámbito de cobertura de las Pólizas de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003769 y 660-47-994000003767, en las cuales figura como tomador/garantizado la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA y como asegurado y beneficiario el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF- por cuanto las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía desbordan los limites contractuales de las pólizas.

A continuación, se esbozan las razones por las cuales las pretensiones de la demanda deben ser negadas y, por consiguiente, se debe absolver a mi asegurada y a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC, de todas y cada una de estas:

* En primer lugar, el demandante no aporta pruebas que acredite que el contrato de trabajo terminó por causa imputable al empleador FUNDACIÓN PRODESARROLLO.
* En segundo lugar, a la fecha no existe prueba que acredite que la FUNDACIÓN PRODESARROLLO le adeude al demandante suma alguna por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y ni que tal circunstancia tenga la virtualidad de comprometer la responsabilidad de la entidad asegurada.
* En tercer lugar, el demandante no acredita que prestó sus servicios en la ejecución de los contratos de aporte No. 76.26.12.1078 (Póliza No. 660-47-994000003769) y 76.26.12.1073 (Póliza No. 660-47-994000003767) afianzados en los contratos de seguros, y que en esa condición realizó tareas al servicio del asegurado, y además, que se cumplió la condición de la que pende la obligación de indemnizar, es decir que se produjo el incumplimiento de las obligaciones de la persona afianzada, en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, siempre y cuando de ello se derive algún perjuicio en contra de la sociedad asegurada y única beneficiaria.
* En cuarto lugar, las pólizas de cumplimiento que sirvieron de base para convocar a mi representada tienen una vigencia que inicia el 14/12/2012, y el demandante indicó que su contrato laboral con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO finalizó el 16/11/2012, es decir que, los contratos de seguros NO prestan cobertura temporal conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, pues el siniestro (terminación de la relación laboral) se produjo con anterioridad a la expedición de las Pólizas.
* En quinto lugar, no se acredita dentro del caso concreto, que se haya causado un daño, lesión y/o perjuicio patrimonial ocasionado a una tercera persona por parte de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y/o del ICBF (asegurados), por el cual se puedan afectar las Pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428.

Adicionalmente, tampoco se ha acreditado que los fundamentos en los que se soporta el petitum de la demanda constituyan un siniestro en los términos convenidos en el contrato de seguro que sirvió de fundamento a la vinculación de la Compañía al proceso, es decir, el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales otorgado por la compañía aseguradora que represento, pues el mismo **sólo se vería afectado si se produce el incumplimiento, durante la vigencia de las pólizas de cumplimiento, del afianzado en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a sus trabajadores en ejecución de los contratos afianzados, siempre y cuando ello llegare a generar algún perjuicio patrimonial para el ICBF entidad asegurada y única beneficiaria del seguro de cumplimiento.**

De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me refiero a cada pretensión de la siguiente manera:

Frente a las pretensiones principales para la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA

**Frente a la pretensión PRIMERA: NO ME OPONGO** toda vez que, conforme al material probatorio obrante al expediente y que LA FUNDACIÓN PRODESARROLLO aceptó la existencia de una relación laboral, es claro que el señorOMAR BECERRA y esta última entidad existió un contrato de trabajo en el lapso y cargo indicado.

**Frente a la pretensión SEGUNDA: ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, debiéndose precisar que, el demandante no acreditó dentro del plenario que al momento de la suscripción del Mutuo Acuerdo por medio del cual se dio por terminado el contrato de trabajo suscrito entre aquel y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, haya existido alguna causal de nulidad (objeto ilícito, causa ilícita, omisión de formalidades o incapacidad absoluta) o algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) por parte de alguno de los suscriptores, por tanto, no hay lugar a declarar la nulidad o ineficacia de dicho acuerdo mutuo.

**Frente a la pretensión TERCERA (A al G): ME OPONGO** a la presente pretensión en razón a que de conformidad con los documentos que obran en el expediente, sobre los cuales el despacho estimará su valor probatorio, se decanta que el demandante suscribió un contrato de trabajo con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO el cual se terminó por mutuo acuerdo en el cual primó la voluntad de las partes, resaltándose que, los contratos celebrados entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el ICBF, no genera vínculo laboral entre el contratante y el personal utilizado por su contratista para la ejecución del mismo, como quiera que estas obraban con total autonomía, autodeterminación, autogestión y autogobierno, por lo tanto, no le corresponde al ICBF responder por los rubros aquí solicitados.

Respecto a la responsabilidad solidaria, se debe reiterar que es requisito *sine qua non* que las labores prestadas por el trabajador y la actividad económica del beneficiario del trabajo o dueño de la obra correspondan a las actividades normales de su empresa o negocio, es decir, será necesario que haya una identidad entre el objeto de la sociedad beneficiaria de la obra, como actividad económica, y la labor prestada por el trabajador. Situación la cual no se presenta en este caso, teniendo en cuenta que el Estado Colombiano desde que organizó administrativamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Ley 7 de 1979, actualmente regulado por la Ley 1098 de 2006); lo hizo bajo el entendido que, el sistema tiene por objeto desarrollar las políticas públicas de infancia y adolescencia, que se entienden como “*el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes*”, y por su parte el trabajador de conformidad con los hechos de la demanda ejecutó funciones de JEFE DE BODEGA, mismas que no corresponden al giro ordinario del objeto del ICBF, por lo tanto, no se cumplen los presupuestos del artículo 34 del C.S.T para declarar la solidaridad.

Ahora bien, se debe dejar presente que las Pólizas de seguro expedidas por mi representada NO se podrían afectar por cuanto se deben cumplir las siguientes condiciones (i) Quien debe fungir como empleador es la entidad afianzada y/o garantizada, es decir la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, no se amparan obligaciones derivadas de un vínculo laboral entre el asegurado y el aquí demandante, (ii) Debe existir un incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, (iii) Que dichas obligaciones se deriven de los contratos afianzados No. 76.26.12.1078 (Póliza No. 660-47-994000003769) y 76.26.12.1073 (Póliza No. 660-47-994000003767), suscritos entre el ICBF como contratante y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO como contratista y, (iv) Que el incumplimiento por parte de la sociedad afianzada genere un detrimento patrimonial para la sociedad asegurada en la póliza, es decir, para el ICBF, en virtud de la declaración de una responsabilidad solidaria.

En atención a lo anterior, y en el remoto evento que se cumplan con los requisitos para la afectación de las pólizas, debe indicarse que las mismas NO amparan el concepto de vacaciones y pago de aportes al sistema general de seguridad social.

Finalmente es menester precisar que, las Pólizas expedidas por mi prohijada NO prestan cobertura temporal conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, pues es un hecho probado que el contrato de trabajo suscrito entre el actor y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO finalizó el 16/11/2012, y véase que las vigencias de los contratos afianzados en las Pólizas iniciaron el 14/12/2012, es decir, posterior a la finalización del vínculo contractual.

**Frente a la pretensión CUARTA: ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, debiéndose precisar que, el demandante no acreditó dentro del plenario que al momento de la suscripción del Mutuo Acuerdo por medio del cual se dio por terminado el contrato de trabajo suscrito entre aquel y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, se encontrara gozando del fuero de estabilidad laboral reforzada por salud, por cuanto no logró probar que para dicha data, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, padeciera deficiencias de mediano y largo plazo, que tuviera una barrera que le impidiera ejecutar labores con normalidad, que contara con restricciones laborales expedidas por médico laboral y que dicha circunstancia haya sido conocido por el empleador, por tanto, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización de 180 días de salario.

**Frente a la pretensión QUINTA: ME OPONGO** toda vez que el litigio aquí suscitado no se produjo con ocasión a un hecho, omisión o incumplimiento de mi asegurada ICBF ni por parte de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, y en tal sentido, mi representada no debe asumir erogaciones de la condena en costas y agencias en derecho causadas dentro del proceso.

Frente a las pretensiones para la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

**Frente a la pretensión PRIMERA: ME OPONGO** sí se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose precisar que la presente pretensión no se encuentra dirigida en contra de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, reiterándose que mi prohijada en su calidad de aseguradora, no tiene relación con los hechos ni las pretensiones incoadas en la parte demandante en contra de PORVENIR S.A., toda vez que, la liquidación del cálculo actuarial le compete única y exclusivamente a las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.

**Frente a la pretensión SEGUNDA: ME OPONGO** sí se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose precisar que la presente pretensión no se encuentra dirigida en contra de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, reiterándose que mi prohijada en su calidad de aseguradora, no tiene relación con los hechos ni las pretensiones incoadas en la parte demandante en contra de PORVENIR S.A., toda vez que, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez le compete única y exclusivamente a las ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL (AFP- ARL).

**Frente a la pretensión TERCERA: ME OPONGO** sí se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose precisar que la presente pretensión no se encuentra dirigida en contra de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, reiterándose que mi prohijada en su calidad de aseguradora, no tiene relación con los hechos ni las pretensiones incoadas en la parte demandante en contra de PORVENIR S.A., toda vez que, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional le compete única y exclusivamente a las ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL (AFP- ARL).

**Frente a la pretensión CUARTA: ME OPONGO** sí se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose precisar que la presente pretensión no se encuentra dirigida en contra de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, reiterándose que mi prohijada en su calidad de aseguradora, no tiene relación con los hechos ni las pretensiones incoadas en la parte demandante en contra de PORVENIR S.A., en tal sentido, mi representada no debe asumir erogaciones de la condena en costas y agencias en derecho causadas dentro del proceso.

1. **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**
2. **EXCEPCIONES PLANTEADAS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF QUIEN EFECTUA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI PROCURADA**

Solicito al juzgador de instancia, tener como excepciones contra la demanda todas las formuladas por la entidad convocante, en cuanto favorezcan los intereses de mi representada y en este sentido y tenor las que propongo a continuación:

1. **PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS LABORALES**

Sin que pueda constituir reconocimiento de responsabilidad alguna, invoco como excepción la PRESCRIPCIÓN, en aras de defensa de mi procurada y tomando como base que en el presente proceso se pretende el reintegro laboral y consigo el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del C.S.T., en concordancia con el artículo 151 del C.P.T., prescriben en un término de tres años, así las cosas, véase que el vínculo laboral del demandante finalizó el 16/11/2012, radicó la demanda el 05/06/2023 y la reclamación realizada a las aquí demandadas se realizó el 10/05/2023, es decir, superó sin lugar a dudas el término referenciado.

Al respecto lo preceptuado por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo señala:

*‘’ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual’’.*

A su vez el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:

*‘’ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto’’.*

Al respecto, señala la Corte Suprema de Justicia en Sentencia CSJ SL 4222 de 2017 lo siguiente:

*“(…) son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual”*.

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL219-2018 del 14 de febrero de 2018 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, estableció que el término de prescripción se debe contar a partir del momento en que los derechos pretendidos se hacen exigibles no desde la fecha en que se hace efectivo. Siendo así, los términos deben contabilizarse desde el momento en que se causa el derecho.

En conclusión, solicito declarar probada esta excepción y absolver a mi asegurada y representada de las obligaciones que emanan de derechos que se encuentran extinguidos por el fenómeno de la prescripción, toda vez que, el vínculo laboral del demandante finalizó el 16/11/2012, radicó la demanda el 05/06/2023 y la reclamación realizada a las aquí demandadas se realizó el 10/05/2023, es decir, cuando ya habían transcurridos los 3 años que precisa la ley.

1. **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD Y DE OBLIGACIÓN A CARGO DEL ICBF DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL C.S.T.**

No es posible endilgar responsabilidad al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF frente a la solidaridad establecida en el artículo 34 del C.S.T. en atención a que es requisito *sine qua non* que las labores prestadas por el trabajador y la actividad económica del beneficiario del trabajo o dueño de la obra correspondan a las actividades normales de su empresa o negocio, es decir, será necesario que haya una identidad entre el objeto de la sociedad beneficiaria de la obra, como actividad económica, y la labor prestada por el trabajador. Situación la cual no se presenta en este caso teniendo en cuenta que el Estado Colombiano desde que organizó administrativamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Ley 7 de 1979, actualmente regulado por la Ley 1098 de 2006); lo hizo bajo el entendido que, el sistema tiene por objeto desarrollar las políticas públicas de infancia y adolescencia, que se entienden como “*el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes*”, artículo 201 Código de Infancia y Adolescencia, los beneficiarios del programa de hogares comunitarios son las familias vinculadas, y no el ICBF, cuya misionalidad no se relaciona con este servicio.

Para mayor precisión la citada solidaridad fue planteada por el legislador en los siguientes términos:

*“ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.*

*2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. (…)”[[1]](#footnote-2)*

En efecto, no existe prueba de que se haya incumplido dicho precepto normativo, pues se resalta que los contratos celebrados entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, no genera vínculo laboral entre la sociedad contratante y el personal utilizado por su contratista para la ejecución de este, como quiera que éste último obraba con total autonomía, autodeterminación, autogestión y autogobierno.

En línea con lo anterior, en sentencia del 10 de noviembre de 2006, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Risaralda – Sala Laboral, al estudiar el tema de la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo con el ICBF, indicó que:

“*no es viable la aplicación en este caso de la solidaridad prevista en el artículo 34 como quiera que los acuerdos celebrados entre dicha institución y la asociación no hacen relación propiamente al contrato de obra que se refiere la ley laboral sino al contrato especial de aporte, por lo que se para consultar su definición y características debe estarse a lo contenido en dichas sus propias normas, y si bien el ICBF participa en algunas decisiones dentro de los hogares infantiles a través de sus representantes, ello obviamente tiene razón de ser en el seguimiento normal que la ley le ordena con relación a los aportes que a través de los contratos se realiza para verificar que los recursos se utilicen para los fines perseguidos*”.

En ese sentido, la solidaridad del Art. 34 del C.S.T. no es viable de cara al ICBF por cuanto al celebrar contratos con otras entidades, estos se rigen de acuerdo con lo contenido en sus propias normas, tal como lo indica el Art. 129 del Decreto 2388 de 1979, el cual señala:

***“ARTÍCULO 129.*** *Todos los demás contratos que celebre el ICBF se someterán a las ritualidades, requisitos, formalidades y solemnidades que establece el decreto 150 de 1976 y demás normas concordantes.”*

Así las cosas, no es procedente la aplicación de los presupuestos del artículo. 34 C.S.T. al ICBF, por cuanto, este se rige por normas especiales que regulan sus trámites internos.

De otro lado, en materia de vinculación laboral a las entidades que conforman la estructura del Gobierno Nacional, en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado entre la vinculación Laboral Ordinaria y la vinculación Laboral Administrativa. En este último caso, además de los elementos que configuran la relación laboral ordinaria, la Constitución y la ley establecen tres (3) elementos adicionales para los empleos públicos, a saber:

*“1.) La existencia del empleo en la planta de personal de la entidad (art. 122 C. P.). Si el empleo no está previsto en la respectiva planta de personal, es un imposible aceptar que se puede desempeñar lo que no existe.*

*2.) La determinación de las ‘funciones’ propias del cargo ya previsto en la planta de personal (Art. 122 de la C. P.). Para la determinación de dichas funciones se tienen en cuenta las de la Entidad, de la dependencia donde se labora y de la labor que cumple; especialmente se observan Los Manuales ‘general y el específico’ de funciones y requisitos aplicables. La ‘obligación’ del empleado es la de cumplir los mandatos del ordenamiento jurídico que le competan; la desobediencia tiene relación con dichos mandatos.*

*3.) La previsión de los recursos en el presupuesto para el pago de los gastos que demande el empleo tiene que ver con el salario, prestaciones sociales, etc. (Art. 122 de la C. P.).”.*

Frente a los contratos de aportes, es importante resaltar que el artículo 21 de la ley 7° de 1979 y el artículo 127 del Decreto Reglamentario 2388 de 1979, establecen que, mediante la celebración de un contrato de aporte, el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF, provee a una institución de utilidad pública o social, de los bienes y recursos indispensables para la prestación total o parcial del servicio, actividad que cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución de utilidad pública o social, destinado a beneficiar los sectores más deprimidos económica y socialmente.

A su turno señala el artículo 19 del Decreto 1137 de 1999, la facultad del ICBF para la celebración de contratos de aporte con instituciones de utilidad pública o social para brindar el servicio de bienestar familiar, y el artículo 8° del Decreto 777 de 1992 señala que “*La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación laboral con las personas que el contratista vincule para la ejecución del contrato”.* Así las cosas, tenemos que, desde la etapa precontractual, no existe solidaridad entre las obligaciones adquiridas por la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Así, si aterrizamos los elementos descritos anteriormente, encontramos que, los mismos se configuran en un contrato de aportes como quiera que por medio de la ley 7 de 1979 se indicó que dicho contrato tiene por objeto las políticas públicas de infancia y adolescencia, que se entienden como el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que no es posible endilgar la solidaridad sobre este tipo de contratos que se dan en un régimen especial de contratación.

Se concluye que NO es posible que se predique la solidaridad que pretende el actora por cuanto no se acreditan los presupuestos contemplados en el artículo 34 del C.S.T., debiéndose resaltar que por expresa prohibición legal, el ICBF no puede contraer obligación laboral con los contratistas del contrato de aportes, máxime si se tiene en cuenta que los acuerdos celebrados entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el ICBF no hacen relación propiamente al contrato de obra que refiere la ley laboral sino al contrato especial de aporte, por lo que para consultar su definición y características debe estarse a lo contenido en sus propias normas, y si bien el ICBF participa en algunas decisiones a través de sus representantes, ello obviamente, tiene razón de ser en el seguimiento normal que la ley le ordena con relación a los aportes que a través de los contratos se realiza, para verificar que los recursos se utilicen para los fines perseguidos, concluyéndose así que los contratos de aportes se escapan de la esfera laboral, y por lo tanto, no le es aplicable las disposiciones del C.S.T., pues corresponden a contratos administrativos que se encuentran regulados por normas especiales de derecho público de conformidad con el Art. 129 del Decreto 2388 de 1979, motivo por el cual se descarta la mencionada solidaridad frente a las acreencias que se pretenden en la demanda.

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DEL ICBF POR CUANTO DICHA SOCIEDAD NO OSTENTÓ LA CALIDAD DE EMPLEADOR DEL DEMANDANTE Y NO SE CONFIGURÓ UN CONTRATO REALIDAD CON DICHA ENTIDAD.**

La presente excepción se fundamenta en el hecho que el señor OMAR BECERRA no tuvo ninguna vinculación laboral directa al servicio del ICBF, ni manera legal como empleado público ni contractual como trabajador oficial. Por consiguiente, es menester precisar que la vinculación del empleado público se realiza mediante un acto de nombramiento y posesión, diferente a la vinculación de un trabajador oficial que se efectúa mediante un contrato laboral. En línea con lo expuesto se precisa que el actor no tuvo un vínculo de carácter laboral mediante el cual se haya configurado los elementos esenciales de un contrato de trabajo, principalmente el elemento de subordinación:

“***ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES****.*

*1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:*

*a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;*

*b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y*

*c. Un salario como retribución del servicio.*

*2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”[[2]](#footnote-3)*

Expuesto lo anterior, es menester precisar que los contratos celebrados entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, no genera vínculo laboral entre la sociedad contratante y el personal utilizado por su contratista para la ejecución de este, como quiera que éste último obraba con total autonomía, autodeterminación, autogestión y autogobierno.

Respecto a lo señalado por la parte del actor, tendiente a indicar que prestó sus servicios a favor del ICBF como indicativo para acreditar una subordinación, se precisa que la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-116612015 (50249) del 05 de agosto del 2015, indicó:

*‘’ (…) la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista, que implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente y productivo de la actividad encomendada, lo cual puede incluir el cumplimiento de un horario,* ***el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores y el reporte de informes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación****.”. (Subraya y Negrillas propias).*

Este criterio unificado ha sido reiterado a lo largo de la línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia como en la sentencia SL 3020 de 2017, con radicado 48531 en la que se manifestó lo siguiente:

*“(…) el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades;* ***no obstante, este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones.*** *Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.” (Subraya y Negrillas propias).*

Lo anterior significa que la vigilancia y el control por parte del contratante respecto del contratista, en razón a las directrices que da este al contratista se realizan con el propósito de que se cumpla con el objeto contractual en debida forma, sin existir subordinación alguna.

Así las cosas, se concluye que el señor BECERRA no tuvo una vinculación laboral al servicio del ICBF, por lo que no se configuró una subordinación en cabeza de aquel, asimismo se deja sentado que era su empleadora la FUNDACIÓN PRODESARROLLO quien impartía las mismas y en relación con la retribución salarial y pago de prestaciones sociales, era esta última sociedad la encargada de efectuar el reconocimiento y pago por dichos conceptos.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

1. **AUSENCIA DE FACTORES DETERMINANTES PARA CONSIDERAR QUE EL DEMANDANTE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA Y POR ENDE NO OSTENTABA UNA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA**

Partiendo de los hechos y pretensiones de la demanda, es menester indicar que la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica cuyo objetivo es proteger a los trabajadores que se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a hechos que afecten su permanencia en la sociedad donde prestan sus servicios, derecho el cual no era titular el señor OMAR BECERRA, toda vez que, no acreditó (i) que previo a la terminación del contrato que ostentaba una limitación física que le impidiera ejecutar sus labores, (ii) que padecía de patologías graves o de mediano o largo plazo, (iii) el empleador no tenía conocimiento de su estado de salud, y (iv) la terminación del contrato no se dio con ocasión a su estado de salud, por el contrario, fue voluntad de las partes por acuerdo mutuo.

Dicho lo anterior, no se desconoce que determinar cuándo surge el amparo en materia laboral a una persona en condición de discapacidad, conlleva una labor con determinado nivel de complejidad, por cuanto de la concreción de tal situación y el nivel de dificultad que esta le representa para «autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad» (Ley 361 de 1997), en este caso en el ámbito laboral, dependerá la existencia o no de la protección foral.

La idea expuesta cobra suma importancia en la medida que las personas pueden presentar una condición de salud que no necesariamente implica para el trabajador una situación de discapacidad, y si bien efectivamente generan una incapacidad temporal y que, inclusive puede tener una garantía específica en la normatividad, no implica que lo sea bajo las normas forales de estabilidad laboral reforzada contenidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Al respecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia señaló por medio de Sentencia CSJ SL 572 de 2021:

*“Es por ello que para conocer ese nivel de disminución en el desempeño laboral, por razones de salud, no basta que aparezca en la historia clínica el soporte de las patologías y secuelas que padece un trabajador, porque la situación de discapacidad en que se encuentra el trabajador no depende de los hallazgos que estén registrados en el historial médico, sino de la limitación que ellos produzcan en el trabajador para desempeñar una labor y, precisamente, esa limitación no es posible establecerla sino a través de una evaluación de carácter técnico, donde se valore el estado real del trabajador desde el punto de vista médico y ocupacional.”*

Sobre el particular, en reciente Sentencia SL1152 de 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, abandonó la postura de exigir porcentajes de pérdida de capacidad laboral como criterio para determinar quiénes son beneficiarios de la garantía, precisando lo siguiente:

“*Realizado el estudio del ordenamiento jurídico vigente, la Corte debe concluir que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 y, de la ley estatutaria 1618 de 2013.”*

En ese sentido, la CSJ – SCL establece tres requisitos que se deben acreditar para que opere la garantía de la estabilidad reforzada establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1991, dejando en claro que estos se pueden demostrar por el trabajador a través de cualquier medio de prueba:

*“a) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructurales corporales tales como una desviación significativa o una pérdida»;*

*b) La existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;*

*c) Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.”*

En adición al argumento, también se ha puesto de presente que, en principio tales afectaciones son atendidas por el sistema de salud bajo las incapacidades temporales, que precisamente buscan su restablecimiento; no obstante, esta figura no comporta per se una situación que genere el amparo, pues como se tiene sentado por esta sala, que no toda afección de salud es merecedora de la protección foral, solo aquella relevante; esto, bajo el convencimiento de la importancia de no desdibujar la finalidad de la garantía instituida por el legislador.

Aunado a los requisitos contemplados por la CSJ, para el caso en concreto, se tiene que el señor BECERRA, no acreditó que padeciera deficiencias de mediano y largo plazo, y además de conformidad con la documental aportada, no se evidencia que al menos haya estado incapacitado para la fecha de la suscripción del acuerdo mutuo de terminación del contrato.

Así entonces, para verificar en el caso en concreto si el demandante gozaba de una protección de estabilidad laboral reforzada se debe observar si se acredita (i) una deficiencia física, mental o sensorial; (ii) si lo anterior implica que la participación en la vida profesional de la demandante se vea obstaculizada, y finalmente (iii) si tal hecho afecta su participación en el ámbito laboral en igualdad de condiciones a la de los demás trabajadores.

Como consecuencia de todo expresado, es totalmente evidente que el señor BECERRA no ha sido beneficiario del fuero por Estabilidad Laboral Reforzada, en el entendido que, de cara al precedente jurisprudencial trazado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta no logró probar que para la fecha que presuntamente le fue terminado el vínculo, padeciera deficiencias de mediano y largo plazo, ni que las mismas sean una barrera para ejecutar labores con normalidad e igualdad de condiciones que los demás trabajadores, ni mucho menos que tuviera restricciones laborales y que dicha circunstancia haya sido conocido por el empleador.

1. **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA DEMANDAR AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF**

La legitimación en la causa es la relación material y procesal entre los sujetos de la pretensión (por activa o por pasiva) con el objeto de que se pretende. En ciencia jurídica, se llama legitimación en causa o para la causa, el concepto que determina si: (i) la parte actora es el sujeto que tiene derecho a serlo en el proceso que se trata y (ii) si el demandado es la persona que debe de sufrir la carga de asumir tal postura en el proceso. A esta relación de las partes en el proceso se llama legitimación o facultad de demandar (legitimación por activa) y obligación de soportar la carga de ser demandado (legitimación por pasiva). En este sentido, entre el demandante y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF **NO** existió relación laboral alguna, por lo cual no se encuentra legitimada la parte demandante para reclamar al asegurado las obligaciones laborales que pretenden, ya que su vinculación se realiza a través de un contrato laboral con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y no con la entidad pública referida.

Al respecto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil en Sentencia SC2215-2021, definiendo:

*“4.2. La* ***Legitimación en causa,*** *por su parte, hace referencia a la necesidad de que entre la persona convocada o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un vínculo que legitime la intervención, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante. Ha sido insistente esta Corporación al calificarlo como un presupuesto de la acción, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimación de lo pedido.”*

Con relación a la legitimación en la causa, se debe señalar que es una figura de derecho procesal que se refiere a la capacidad de las partes, de acuerdo con la ley, de formular o controvertir las pretensiones de una demanda. En este sentido, no existe debida **legitimación en la causa** cuando el actor es una persona distinta a quien le correspondía formular las pretensiones o cuando el demandado es diferente de aquel que debía responder por la atribución hecha por el demandante.

Así mismo, refiriéndose a este tema el procesalista español Leonardo Prieto Castro, indica:

*“En ciencia jurídica se llama legitimación en causa o para la causa el concepto que determina si el demandante es el sujeto que tiene derecho a serlo en el proceso de que se trata, y el demandado la persona que haya de sufrir la carga de asumir tal postura en este proceso... A esta relación de las partes en el proceso se llama legitimación o facultad de demandar (legitimación activa) y* ***obligación de soportar la carga de ser demandado*** *(legitimación pasiva), por hallarse en determinada relación con el objeto traído al proceso”. (Derecho Procesal Civil. T.1, pág. 166, Ed. 1946, Saragoza). (Subraya y negrilla por fuera del texto).*

Así las cosas, para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer; es decir, considera la identidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), y **la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva);** identidad que no se configura en el presente caso.

En el presente caso nos encontramos frente a una evidente falta de legitimación en la causa por activa en términos sustantivos y adjetivos ya que el ICBF no fue parte de la relación material que dio lugar al presente litigio, es decir que, no tuvo participación alguna entre la relación contractual del demandante con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, generándose así la imposibilidad de que la parte actora haga exigibles derechos frente al ICBF, ya que de conformidad con lo indicado en los hechos de la demanda, lo aquí pretendido se encuentra relacionado con el reconocimiento y pago de emolumentos de índole laboral, a los cuales no hay lugar ya que el demandante nunca contaron con una vinculación de carácter laboral respecto del ICBF.

De esta manera se resalta, que no hay lugar al reconocimiento de las pretensiones incoadas por la parte demandante ya que, como bien se ha logrado demostrar, no ha mediado entre estas y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF un contrato de trabajo, siendo inexistente la solidaridad que se pretende predicar.

1. **ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.**

Esta excepción se fundamenta en un hecho que es común denominador de la demanda, cual es la recurrente alusión a perjuicios que no están probados, de manera que debe destacarse que ni siquiera en gracia de discusión puede accederse a peticiones como las demandadas, en cuanto constituyen la búsqueda de indemnización de un detrimento que no está debidamente acreditado.

Por ende, si se llegara a aceptar que alguno de los perjuicios se generó, la estimación que de su monto realiza la parte actora sólo refleja una desmedida e injustificada ambición para obtener un lucro injustificado, como se aprecia del examen de los supuestos de carácter material y extrapatrimonial.

1. **COMPENSACIÓN.**

Se formula esta excepción en virtud de que en el improbable evento de que prosperen las pretensiones de la demanda y se imponga alguna condena a la demandada, del monto de esta deberán deducirse o descontarse las sumas que ya fueron pagadas al demandante mediante el acuerdo de pago extraprocesal suscrito entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el señor OMAR BECERRA, en el cual se le canceló la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)**

1. **GENÉRICA O INNOMINADA.**

Ruego declarar probada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso de este proceso, de conformidad a la Ley y sin que ello signifique que se reconoce responsabilidad alguna de mi representada.

**CAPÍTULO II.**

**CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL ICBF A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC.**

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**Frente al hecho PRIMERO:** Este hecho contiene varias afirmaciones que contesto así:

* **ES CIERTO,** que mediante la Ley 007 de 1979 se creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF-, reorganizándose el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; siendo su objeto, que todos los niños tienen derecho a participar de los programas del Estado y a la formación básica.
* **ES CIERTO,** el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF como ente coordinador del Sistema Nacional Bienestar Familiar celebra contratos de aportes, que tienen como objeto el apoyar la atención de la primera infancia en situación de vulnerabilidad.

**Frente al hecho SEGUNDO: ES CIERTO,** conforme lo indica el art. 127 del Decreto 2388 de 1979 reseñado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, celebra CONTRATO DE APORTES, con el objeto de aportar los recursos del presupuesto Nacional para los programas de protección de los menores de edad y las familias.

**Frente al hecho TERCERO:** **ES CIERTO** que en los contratos de aporte suscritos entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA se pactó como cláusula la de *EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.*

**Frente al hecho CUARTO: ES CIERTO,** debiéndose precisar que los Contratos de aportes suscritos entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA fueron los No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 y, en estos se pactó como objeto el referido por la convocante, así se logra establecer de la documental aportada al plenario:



**Frente al hecho QUINTO: ES CIERTO** que en los contratos de aportes No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 suscritos el 12/12/2012, se estableció por la parte convocante la cláusula de garantías con el fin de amparar los riesgos y el incumplimiento. Mismas garantías que sirvieron de base para afianzar los mencionados contratos de aportes, que suscribió el ICBF con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA, mediante las Pólizas de Garantía de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, emitida por mi representada, y en la cual su objeto respectivamente fue:

\*Póliza No. 660-47-994000003767:



\* Póliza No. 660-47-994000003769:



**Frente al hecho SEXTO:** Este hecho contiene varias afirmaciones que contesto de la siguiente manera:

* **ES CIERTO,** la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA concertó con mi representada las siguiente Pólizas: (i) Pólizas de Garantía de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 mediante los cuales de afianzaron los contratos de aportes No. No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 y (ii) Pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 mediante los cuales de afianzaron los contratos de aportes No. No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073.
* **NO ES CIERTO** que en todas las pólizas referidas se amparó el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, pues es preciso indicar que en lo concerniente a las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 se otorgó como amparo el de predios, labores y operaciones y, sus objetos consistieron en:





Así entonces, se logra concluir que no existe cobertura bajo las presentes Pólizas de RCE y no es posible afectar la misma, toda vez que los amparos ofrecidos no tienen cobertura para lo pretendido en el escrito de demanda, esto teniendo en cuenta que en la póliza de RCE NO se amparó el pago de acreencias de carácter laboral, sino que su objeto consiste en amparar perjuicios patrimoniales que cause el asegurador con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual.

**Frente a hecho SÉPTIMO:** Este hecho contiene varias afirmaciones que contesto de la siguiente manera:

* **NO ME CONSTA** que el señor OMAR BECERRA laboró para la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA, con ocasión del desarrollo de actividades o en ejecución del objeto de un CONTRATO DE APORTES.

**NO ES CIERTO** que el desarrollo de las actividades realizadas por el actor en virtud de un contrato de aportes, hayan sido en el periodo de vigencia de los contratos de seguros expedidos por mi representada, pues véase que, de conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda la terminación del vínculo laboral entre el señor BECERRA y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO se dio el 16/11/2012, y los contratos de aportes afianzados iniciaron el 14/12/2012, es decir que, NO posible que el demandante haya ejecutado sus funciones en virtud de los contratos afianzados y por ende en vigencia de las Pólizas que sirvieron de base para el llamamiento en garantía. Así las cosas, al no existir una cobertura temporal de las Pólizas de Seguros no hay lugar a su afectación.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**ME OPONGO** rotundamente a la pretensión expuesta por la parte convocante, por cuanto, en primer lugar, existe una falta de cobertura temporal de las Pólizas de Garantía de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, comoquiera que, en aquellas se concertó que la modalidad sería OCURRENCIA, de modo que las pólizas únicamente amparan los hechos que ocurran en vigencia de esta, así las cosas, los contratos afianzados No. 76.26.12.1078 (Póliza No. 660-47-994000003769) y 76.26.12.1073 (Póliza No. 660-47-994000003767), suscritos entre el ICBF como contratante y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA  como contratista, tuvieron su inicio el 14/12/2012, y de conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda la relación laboral entre el señor BECERRA y la afianzada culminó el 16/11/2012, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de los contratos afianzados y la expedición de las Pólizas.

Aunado a lo anterior, se debe poner de presente que la aseguradora únicamente ampara los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surgieron en vigencia del contrato afianzado, esto es, del 14/12/2012 al 30/12/2013, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos para que se dé la afectación de dicho amparo, esto es:

1. Quien debe fungir como empleador es la entidad afianzada (FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA).
2. La entidad afianzada debe adeudar salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al trabajador que reclama.
3. El trabajador debe acreditar que prestó sus servicios en la ejecución de los contratos afianzados No. 76.26.12.1078 (Póliza No. 660-47-994000003769) y 76.26.12.1073 (Póliza No. 660-47-994000003767)
4. Se debe configurar un perjuicio patrimonial para el asegurado ICBF con ocasión a la declaratoria de una responsabilidad solidaria

En este entendido no se acreditó por el demandante y convocante ninguno de los presupuestos antes enunciados, razón por la cual, la póliza carece de cobertura material y temporal frente a lo pretendido.

En segundo lugar, es preciso reiterar que existe una imposibilidad de declarar responsabilidad solidaria del ICBF frente a lo pretendido por la parte actora, por cuanto, no se acreditan los presupuestos contemplados en el artículo 34 del C.S.T., debiéndose resaltar que por expresa prohibición legal, el ICBF no puede contraer obligación laboral con los contratistas del contrato de aportes, máxime si se tiene en cuenta que los acuerdos celebrados entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el ICBF no hacen relación propiamente al contrato de obra que refiere la ley laboral sino al contrato especial de aporte, por lo que para consultar su definición y características debe estarse a lo contenido en sus propias normas, y si bien el ICBF participa en algunas decisiones a través de sus representantes, ello obviamente, tiene razón de ser en el seguimiento normal que la ley le ordena con relación a los aportes que a través de los contratos se realiza, para verificar que los recursos se utilicen para los fines perseguidos, concluyéndose así que los contratos de aportes se escapan de la esfera laboral, y por lo tanto, no le es aplicable las disposiciones del C.S.T., pues corresponden a contratos administrativos que se encuentran regulados por normas especiales de derecho público de conformidad con el Art. 129 del Decreto 2388 de 1979, motivo por el cual se descarta la mencionada solidaridad frente a las acreencias que se pretenden en la demanda.

Finalmente, en lo concerniente a las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 se concertó como amparo el de predios, labores y operaciones, cuyos objetos respectivamente consistieron en:





Así entonces, se logra concluir que no existe cobertura bajo las Pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 y no es posible afectar las mismas, toda vez que en gracia de discusión y sin que se represente algún tipo de responsabilidad, por cuanto los amparos ofrecidos no tienen cobertura para lo pretendido en el escrito de demanda, esto teniendo en cuenta que en la póliza de RCE NO se amparó el pago de acreencias de carácter laboral sino que su objeto consiste en amparar perjuicios patrimoniales que cause el asegurador con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual.

En virtud de lo anterior, es claro que mi representada no tiene deber contractual de reconocer suma alguna de dinero en favor de la parte actora, pero en la improbable hipótesis que, con sujeción a las condiciones de la póliza, fuera condenada, pese a que la única beneficiaria de la misma es el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, según la póliza y el régimen vigente, previamente tendría que comprobarse o establecerse que el demandante efectivamente estuvo vinculado como trabajador de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y que en esa condición realizaron tareas a su servicio, en ejecución del contrato de aportes afianzados (76.26.12.1078 y 76.26.12.1073) y además, que se cumplió la condición de la que pende la obligación de indemnizar, es decir que se produjo el incumplimiento de las obligaciones de la entidad afianzada, en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, siempre y cuando de ello se derive algún perjuicio en contra de la sociedad asegurada y beneficiaria, es decir, el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF y en razón a ello se logre deprecar la responsabilidad solidaria.

Ahora bien, la afectación de las Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, emitidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., solo operarán en el remoto evento en que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF tenga que responder por los salarios, prestaciones sociales insolutos e indemnizaciones laborales del trabajador de la entidad afianzada, generados durante la vigencia de la póliza y en ejecución de los contratos de aportes afianzados, es decir, si jurídicamente surgiera el deber del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, de responder por el mencionado concepto, solo en ese caso, mi procurada entraría a asumir, con base en el seguro y dentro del límite asegurado, sin perjuicio de todas las condiciones de la póliza, incluso aquellas que lo exonera, su deber de asegurador del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF indemnizando a dicha sociedad, dentro del marco de las condiciones de la póliza por lo que a ella le toque pagar a las trabajadoras de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO.

En la hipótesis planteada en el párrafo anterior, una vez la compañía hubiere pagado al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF lo que ella deba pagar al demandante, como trabajador de FUNDACIÓN PRODESARROLLO, por ministerio de la ley opera la subrogación de los derechos que tiene la asegurada (Art. 1096 C.Co.) contra la afianzada, por ser ésta la causante del siniestro, en cuanto incumplió con el pago de los salarios y prestaciones sociales que se estarían reclamando en este proceso.

De igual forma, resaltamos que dentro del contrato de seguro por el cual fue vinculada mi procurada, NO se encuentra cubierto los aportes al Sistema de Seguridad Social ni los conceptos que se generen por vacaciones, por lo que, en el remoto e improbable evento, en el cual, prosperen las pretensiones de la parte demandante, el Juez debe ceñirse sujetarse a las diversas condiciones de las Pólizas, la cual, determina el ámbito, extensión y alcance del respectivo amparo, así como también el límite, suma asegurada, exclusión de amparo, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto del contrato de seguro y a mi representada, al contenido de tal póliza, que otorga exclusivamente la protección que literalmente se pactó, siempre y cuando se trate también de un hecho cubierto, es decir, del incumplimiento de las obligaciones afianzadas, pero solo si él mismo causa detrimento patrimonial o material a la citada entidad asegurada.

**IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Como excepciones perentorias formulo las siguientes:

1. **FALTA DE COBERTURA TEMPORAL DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**

Antes de exponer esta excepción, es imperativo recordar que dada la naturaleza de la obligación que contrae el Asegurador en el Contrato de Seguro, resulta de la mayor importancia la determinación del momento exacto a partir del cual aquel asume el riesgo que le es trasladado y así mismo la hora y el día hasta los cuales va tal asunción. Puesto que únicamente estará obligado a ejecutar la prestación a su cargo cuando el riesgo se realice dentro de ese lapso, es decir si el siniestro se presenta dentro de esos límites temporales. Para este caso, en las pólizas de cumplimiento No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 se concertó que la modalidad sería OCURRENCIA, de modo que las pólizas únicamente amparan los hechos que ocurran en vigencia de esta. En tal virtud, no puede perderse de vista que la vigencia para el amparo de salarios, prestaciones sociales es la comprendida entre **14/12/2012 al 30/12/2013** y que, para dicho amparo, se otorgan tres años más con relación a la fecha de finalización del contrato afianzado, por motivo de la prescripción trienal, razón por la cual solo quedan cubiertos los hechos acaecidos en este lapso temporal. Por lo cual, desde ya debe tener en cuenta el Despacho, que las acreencias laborales causadas con anterioridad y posterioridad a dicho lapso, no se encuentran cubiertos temporalmente por la póliza expedida por mi prohijada, así como, aquellos siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de las pólizas así el hecho se haya consumado en vigencia de estas, en el caso marras, el demandante afirmó que su **contrato laboral finalizó el 16/11/2012**, es decir, con anterioridad a la vigencias de las pólizas.

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado ha sido enfático en establecer que el derecho a la indemnización solo surge cuando el riesgo se realiza dentro del periodo amparado por las pólizas, pues si éste no se materializa dentro del término de vigencia no podrá ser cubierto por las respectivas pólizas:

*“(...) De acuerdo con lo anterior, el legislador sólo concede el derecho a la indemnización a cargo del asegurador, cuando el riesgo se realiza o inicia su realización dentro del periodo amparado por la respectiva póliza. Como lo sostuvo la Sala, “Debe tenerse en cuenta que lo que se exige en el régimen de los contratos de seguros, en cuanto a su vigencia y cobertura, es que el riesgo efectivamente se materialice durante el periodo de vigencia de las pólizas, puesto que una cosa es el surgimiento del derecho a obtener la indemnización y otra cosa es el derecho a recibir su pago, el que sí se concreta una vez se hace la reclamación en la forma establecida por la ley.”[[3]](#footnote-4)* (Subrayado y Negrilla fuera del texto original)

Al respecto, se observa que el artículo 1047 del Código de Comercio, establece cuales son los requisitos que debe contener las pólizas, entre los cuales se encuentran (i) la determinación de la fecha en que se extiende la misma y (ii) la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras. Obsérvese como el legislador consideró necesario determinar el límite temporal de cobertura de las pólizas de seguro, pues la responsabilidad de la Aseguradora estará delimitada estrictamente por las fechas de cobertura.

De esta forma, resulta evidente que el riesgo contractualmente amparado por la Aseguradora es aquel que se encuentra dentro de la vigencia de las pólizas de seguro. En otras palabras, para que sea jurídicamente posible la afectación de las pólizas, resulta indispensables que el riesgo asegurado haya acaecido dentro de los extremos temporales fijados en el contrato de seguro. Al respecto ha indicado el Consejo de Estado:

*“32. Dada la naturaleza de la obligación que contrae el asegurador, resulta de la mayor importancia la determinación del momento exacto a partir del cual aquel asume el riesgo que le es trasladado y así mismo, la hora y el día hasta los cuales va tal asunción, puesto que únicamente estará obligado a ejecutar la prestación a su cargo cuando el riesgo se realice dentro de ese lapso, es decir si el siniestro se presenta dentro de esos límites temporales. Al respecto, el artículo 1073 del C. de Co., relativo a la responsabilidad del asegurador, establece que “Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato. Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro*

*33. De acuerdo con lo anterior, el legislador sólo concede el derecho a la indemnización a cargo del asegurador, cuando el riesgo se realiza o inicia su realización dentro del periodo amparado por la respectiva póliza. Como lo sostuvo la Sala, “Debe tenerse en cuenta que lo que se exige en el régimen de los contratos de seguros, en cuanto a su vigencia y cobertura, es que el riesgo efectivamente se materialice durante el periodo de vigencia de las pólizas, puesto que una cosa es el surgimiento del derecho a obtener la indemnización y otra cosa es el derecho a recibir su pago, el que sí se concreta una vez se hace la reclamación en la forma establecida por la ley”[[4]](#footnote-5)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que los riesgos dentro de las pólizas deben ser determinados temporalmente, en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes. De modo que los mismos deberán ser respetados puesto que así lo han pactado las partes en el contrato de seguro.

“*Previo a abordar la problemática anunciada, conviene dejar sentado que: Si, por definición, el riesgo es la posibilidad de realización de un evento susceptible de producir un daño (siniestro) previsto en el contrato, va de suyo que, en el marco de la autonomía de la voluntad y de las normas legales imperativas y relativamente imperativas, las partes deberán acordar la determinación del riesgo cubierto. En efecto, el interés asegurado no es factible hallarlo asegurado bajo cualquier circunstancia o causa, sin límites temporales, o en cualquier lugar que se halle o ubique. Por el contrario, se hace necesario delimitar el riesgo causal, temporal y espacialmente*.”[[5]](#footnote-6) (Subrayado fuera del texto original)

Frente a este mismo tema, la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que en tratándose de seguros contratados en la modalidad ocurrencia, el hecho dañoso debe indudablemente acontecer durante la vigencia de las pólizas. Es decir, que para que nazca obligación condicional del asegurador tendrá que acontecer el hecho dañoso durante la limitación temporal pactada en las pólizas, como se lee:

*“ARTÍCULO 1057. TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS. En defecto de estipulación o de norma legal,* *los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato.”*

Confirmando lo dicho en líneas precedentes, el artículo 1073 del mismo Código, consagra expresamente que la responsabilidad del asegurador debe estar consignada dentro de los límites temporales de las pólizas de seguro:

*“ARTÍCULO 1073. RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR SEGÚN EL INICIO DEL SINIESTRO. Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los términos del contrato.*

*Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será responsable por el siniestro.” (subrayado fuera del texto original).*

De conformidad con el artículo citado en precedencia y sin perjuicio de lo manifestado frente a la falta de cobertura material de las pólizas, es menester precisar que mi representada en calidad de aseguradora no está obligada asumir siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de las pólizas así el hecho se haya consumado en vigencia, es decir que, si se prueba que la sociedad afianzada incurrió en un incumplimiento contractual con su trabajador antes de la vigencia de las pólizas y que dicho incumplimiento se consumó en vigencia de esta, mi representada no será responsable por el siniestro.

De acuerdo a lo anterior, es pertinente concluir que dado que la vigencia de las Pólizas expedidas por mi representada, tuvo término de vigencia desde las 00:00 horas del 14/12/2012 hasta las 24:00 horas del 30/12/2013, y que para el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, se otorgan tres años más con relación a la fecha de finalización del contrato afianzado por la prescripción trienal, razón por la cual solo quedan cubiertos los hechos acaecidos en este lapso temporal no habría lugar a la afectación de las pólizas de seguro con ocasión a acreencias causadas con anterioridad a la fecha inicio de la vigencia de aquellas y acreencias causadas con posterioridad a la fecha final de vigencia, así como, no está obligada asumir siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de las pólizas así el hecho se haya consumado en vigencia.

De todo lo anterior, se concluye sin mayores dificultades que las eventuales acreencias laborales causadas con anterioridad al 14/12/2012 y con posterioridad al 30/12/2013, (se otorgan tres años más con relación a la fecha de finalización del contrato afianzado por la prescripción trienal), no se encuentran cubiertas temporalmente en las pólizas, puesto que acaecieron con anterioridad y posterioridad a la vigencia de estas, en igual sentido, mi representada no está obligada asumir siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de las pólizas así el hecho se haya consumado en vigencia.

En conclusión, el Despacho tendría que analizar que las Pólizas de Seguro expedidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., NO cubren temporalmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales causados con anterioridad al 14/12/2012 y con posterioridad al 30/12/2013 (se otorgan tres años más con relación a la fecha de finalización del contrato afianzado por la prescripción trienal), razón por la cual solo quedan cubiertos los hechos acaecidos en este lapso temporal así como tampoco los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la póliza así el hecho se haya consumado en vigencia, dado que siguiendo los términos de los artículos 1057 y 1073 del Código de Comercio, mi procurada no estaría llamada a responder por los hechos acaecidos fuera de la vigencia de la póliza, así como tampoco por aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la vigencia y consumas en vigencia de estas, por lo que, teniendo en cuenta que el contrato laboral suscrito entre el señor BECERRA y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO finalizó el 16/11/2012, es decir, con anterioridad a la vigencia de las pólizas, existiendo así una falta de cobertura temporal.

1. **FALTA DE COBERTURA MATERIAL DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**
* **Falta de cobertura material de las pólizas dado que el demandante no ha probado que haya desarrollado funciones con ocasión a los contratos de aportes No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073**

La presente excepción se fundamenta en el hecho de que el demandante no ha probado que prestó sus servicios en la ejecución de los contratos de aportes Nos. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073. De hecho, el demandante refiere que la relación laboral entre aquel y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO se dio entre el 19/07/2010 al 16/11/2012, y los contratos afianzados fueron suscritos el 12/12/2012, por lo que, NO es posible que el actor haya desarrollado funciones a favor de aquellos.

En este sentido, es menester precisar que las condiciones particulares y generales de las pólizas que recoge el Contrato de Seguro de Cumplimiento reflejan la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

Tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

***“(…) Art. 1056.-******Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”.***

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, limitando la cobertura de las pólizas.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el asegurador supeditó la afectación de los amparos debiéndose acreditar que el riesgo se materializó en la ejecución de los contratos de aportes Nos. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073.

Aunado a lo anterior, el riesgo que se amparó en el caso de la póliza de cumplimiento concretamente es el que el ICBF deba responder por los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que estaba obligada la FUNDACIÓN PRODESARROLLO relacionado con los trabajadores utilizados por la sociedad garantizada en la ejecución de los contratos afianzados durante la vigencia de las pólizas sobre las cuales se erige el llamamiento en garantía a mi representada, **escenario que nos ubica en la situación en la cual debe probarse dentro del proceso que el demandante ejerció sus funciones en virtud de los contratos de aportes Nos. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 de lo contrario, aun cuando se probara la solidaridad de la asegurada en las pólizas no habría lugar a condenar a la compañía aseguradora.**

* **Las Pólizas De Seguro De Cumplimiento En Favor De Entidades Estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 no prestan cobertura material si se condena única y exclusivamente al tomador de la póliza la FUNDACIÓN PRODESARROLLO**

En este punto es necesario advertir que el único asegurado en la póliza de cumplimiento No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 es el ICBF, como consta en la carátula del contrato. Dicha entidad, no tuvo injerencia en la relación contractual que sostuvo el demandante. De tal suerte que deberá advertirse desde ya que las pólizas de seguro expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., no podrán ser afectadas, como quiera que el riesgo asegurado en la póliza en mención consiste en amparar el incumplimiento en que incurra el afianzado en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales con sus trabajadores con ocasión a la ejecución del contrato afianzado y que tal virtud, comprometa la responsabilidad de mi asegurada. Resulta claro que el contrato de seguro no presta cobertura material, para amparar los incumplimientos frente al pago de acreencias laborales que únicamente se le imputen al FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, puesto que en el contrato solo se amparó los perjuicios que debe asumir el asegurado de las pólizas con ocasión al incumplimiento del afianzado de cara a los trabajadores de este último.

Es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la Compañía Aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio, puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma, como se explica que, al suscribir el contrato de seguro respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo. De tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual.

La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

*“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual* ***se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.****6*(negrilla fuera del texto)

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio, con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones en las cuales asumen los mismos. En este orden de ideas y como se ha venido exponiendo de forma trasversal en el documento, no resulta jurídicamente admisible trasladar una eventual obligación indemnizatoria a mi poderdante, como quiera que las pólizas no prestan cobertura material. Lo anterior, aterrizado al caso concreto quiere decir que, de la mera lectura de los contratos de seguros, se entiende que en estos se amparó el riesgo del incumplimiento del afianzado respecto del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que deba a sus trabajadores y que, en tal virtud, comprometa la responsabilidad de la sociedad asegurada en las pólizas. Es decir, la Aseguradora cubre la Responsabilidad atribuible al Asegurado nombrado en la carátula de las pólizas cuando este deban asumir un daño derivado de una reclamación de la cual se pretenda obtener el reconocimiento y pago de los conceptos señalados. Sin embargo, no debe perderse de vista que las pólizas en mención no cubren materialmente la responsabilidad en la que incurran terceros distintos al asegurado ni tampoco las eventuales condenas que se puedan llegar a efectuar de cara a una posible declaratoria de responsabilidad patronal por concepto de perjuicios materiales.

En ese sentido, es claro el asegurado no está llamado a responder en este caso, puesto que el incumplimiento aquí alegado no fue causado por sus acciones u omisiones, dado que: (i) no fungía como empleador del actor y (ii) no procede la declaración de solidaridad preceptuada en el artículo 34 del C.S.T.

En conclusión, las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 no prestan cobertura material y no podrán ser afectadas, como quiera que se estipuló que la aseguradora cubrirá a la entidad asegurada de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, se entiende entonces que: (i) Al no acreditar la solidaridad deprecada en el artículo 34 del C.S.T., no se genera un perjuicio para el asegurado de las pólizas y por ende, no se hace extensiva la condena al ICBF, y (ii) Al no imputársele una condena a quien funge como único asegurado, no hay lugar a que ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., asuma pagos de sociedades las cuales no fungen como aseguradas en las póliza emitidas.

* **Las pólizas de seguro de cumplimiento no prestan cobertura material ante la declaratoria de un contrato realidad entre el demandante y ICBF**

En las pólizas de cumplimiento relacionadas en la presente excepción se ampararon los eventuales incumplimientos que haya incurrido la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA respecto de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y que ello genere una consecuencia negativa para ICBF. En ese orden de ideas, el riesgo que se ampara por medio de las pólizas es la afectación que llegaré a sufrir el patrimonio del ICBF ante la declaratoria del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que hubiere incumplido el contratista, de cara a los trabajadores que aquel vincule para la ejecución del contrato afianzado, excluyéndose así las obligaciones derivadas de un vínculo laboral entre el asegurado y el aquí demandante.

En este sentido es manifiesto, que para que opere la referida cobertura, deben cumplirse las siguientes condiciones:

* **Quien debe fungir como empleador es la persona afianzada FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA** no se amparan obligaciones derivadas de un vínculo laboral entre el asegurado u otra entidad y el aquí demandante.
* Debe existir un incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del afianzado.
* Que dichas obligaciones tengan origen en el contrato afianzado
* Que exista un detrimento patrimonial para el asegurado de la póliza con ocasión a la declaración de responsabilidad solidaria.

Así las cosas, es claro que el contrato de seguro no ampara los incumplimientos en los que directamente llegare a incurrir ICBF frente al pago de acreencias laborales de sus trabajadores.

* **Las Pólizas de Seguro de cumplimiento no prestan cobertura material por valores reclamados con ocasión a conceptos disímiles a los contenidos en la carátula de las pólizas, tales como; aportes a pensión, vacaciones, indexaciones, intereses moratorios, costas, agencias en derecho, entre otras.**

En el contrato de seguro de cumplimiento, se concertó como único amparo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, es decir que mi representada no ampara conceptos que no se encuentren taxativamente descritos en la caratula de las pólizas, por lo que únicamente está obligada a cubrir los siguientes:



Recuérdese que la obligación indemnizatoria de la aseguradora se podrá predicar sólo cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo exigible.

Además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, entre ellos el contenido en el Art. 1079 de este último que establece: *“(…) El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (…).”*

De acuerdo con lo estipulado, expresamente, en el contrato de seguro de cumplimiento, se establecieron límites máximos de responsabilidad del Asegurador para cada uno de los amparos otorgados, que corresponden al tope máximo de la obligación indemnizatoria de la Compañía por todos los siniestros amparados durante la vigencia de las pólizas, que se entenderán como una sola pérdida o evento.

Por lo anterior, es necesario indicar que en el remoto evento en que se produzca una condena en contra de mi representada, el Juzgador deberá ceñirse a las condiciones particulares y generales que fueron pactadas en las pólizas contratadas, los límites asegurados para cada uno de sus amparos, la vigencia de los mismos y en general con el objeto de la garantía del contrato de seguro, por lo que mi representada únicamente está obligada a cubrir los amparos que se encuentran expresamente incluidos en la caratula de las pólizas de seguro de cumplimiento y durante la vigencia pactada.

En ese orden de ideas, los riesgos que se ampararon, en el caso de las pólizas de seguro, concretamente son el pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, amparo el cual operaría en el evento en el que el ICBF deba responder por aquellos rubros a que estaba obligado la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, relacionado con los trabajadores utilizados por dicha sociedad, en la ejecución del contrato afianzado, durante la vigencia de las pólizas, más NO debe asumir el pago de aportes a pensión, sanciones moratorias, vacaciones, indexaciones, costas, agencias en derecho, entre otras.

1. **FALTA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 660-74-994000001430 Y 660-74-994000001428 DE CARA A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Si bien, el llamamiento en garantía efectuado a mí representada se realizó respecto de las Pólizas de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 y las Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 660-74-994000001430 Y 660-74-994000001428, éstas últimas **NO** tienen cobertura respecto de lo pretendido por el demandante, puesto que, el mismo solicitó el pago y reconocimiento de acreencias laborales, y las pólizas de RCE ampararon lo relativo a:



Y conforme el clausulado general de las pólizas, este amparo cubre:



Así, la póliza en mención solo tiene cobertura respecto de la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, por los perjuicios que sean ocasionados como consecuencia de siniestro alguno ocurrido durante el periodo de ejecución del contrato, causados directamente a terceros por las situaciones mencionadas en el clausulado general. Por otro lado, si bien las Pólizas de Cumplimiento eventualmente prestarían cobertura conforme a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, las mismas no prestan cobertura temporal, pues la relación laboral se produjo del 19/07/2010 al 16/11/2012, y la vigencia de las pólizas datan del 14/12/2012 al 30/12/2013, es decir, posteriores a la finalización de la relación laboral.

En conclusión, no podría el fallador afectar las pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 en caso de una condena, puesto que, como se mencionó la misma no cubre lo pretendido por la parte demandante pues, solo tiene cobertura frente a la responsabilidad civil extracontractual.

1. **RIESGO CIERTO NO ASEGURABLE RESPECTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 EXPEDIDAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**

De llegar a considerarse que hubo por parte de la persona afianzada el supuesto incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de cara a las obligaciones que le asisten como empleador, no puede perderse de vista que se trata de un riesgo inasegurable, como quiera que, si este presunto incumplimiento se produjo con anterioridad a la fecha de la vigencia de la póliza, se trata de un hecho cierto, por lo tanto, inasegurable. Así lo dispone el Código de Comercio en el artículo 1054, al consagrar:

*“Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador.* ***Los hechos ciertos****, salvo la muerte, y los físicamente imposibles,* ***no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños a los contratos de seguro.*** *Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En línea con lo expuesto en el acápite que antecede, es indiscutible que la fecha del supuesto siniestro, el incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones solo pudo haber tenido lugar en vigencia del anexo 0 de las pólizas que arbitrariamente se pretenden afectar.

En efecto, es indiscutible que el contrato de seguro ampara hechos futuros e inciertos, lo que correlativamente significa, que en ningún escenario puede asegurar hechos pretéritos y por tanto ciertos. En esta medida, toda vez que para la fecha en la cual se perfeccionó el aseguramiento el presunto incumplimiento ya no era una contingencia futura, sino que ya había acaecido, es claro que, al ser un hecho cierto, es extraño a los contratos de seguro, y de esa manera constituye un riesgo no asegurable.

Retómese acá lo expuesto con total claridad por Consejo de Estado en el año 2011: *“En otras palabras,* ***la ocurrencia del siniestro en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales, es el hecho en sí de incumplimiento y no el acto administrativo que lo declara****”[[6]](#footnote-7).* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La Corte Suprema de Justicia ha definido efectivamente el riesgo en materia de seguros de la siguiente manera:

*“El riesgo, elemento esencial del contrato de seguro, justamente es un****acontecimiento futuro e incierto temido por el acreedor, por el contratante o por el tomador;*** *llámese terremoto, incendio, inundación, enfermedad, inclusive la propia muerte (artículos 1054 y 1137 del Código de Comercio), etc.; esta última, entendida como “(…)****la incertidumbre del acontecimiento de una contingencia desfavorable”.*** *Todos esos fenómenos se aseguran, no para suprimir el hecho condicional, sino con el propósito de obtener una indemnización o compensación económica, ante la ocurrencia de la condición o del evento dañoso o del acontecimiento temido. Por tanto,****el riesgo, en general es un hecho condicionante, esto es, verdadera circunstancia futura e incierta, por la posibilidad de su ocurrencia al mediar la incertidumbre de que sobrevenga el hecho por obra del azar, del alea, afectando patrimonialmente a un sujeto de derecho, en forma concreta (seguro de daños), o en forma abstracta (seguro de personas).****”[[7]](#footnote-8)*(Negrilla y subrayado fuera del texto original)

La importancia de lo que precede radica en que es de la esencia del contrato de seguro su carácter aleatorio, el cual, implica que la obligación que de este se deriva pende de la realización de un hecho futuro respecto del cual no se tiene certeza sobre su ocurrencia. Si se pretendiera, como en el caso concreto se pretende, hacer exigible la obligación que emana del contrato de seguro por un hecho ya acaecido y por tanto cierto, ello implicaría eliminar completamente su esencia aleatoria, para transformarlo en un contrato conmutativo.

En conclusión, no hay lugar a dudas que el pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA a sus trabajadores, por fuera de la vigencia que prestan las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, no constituye un hecho incierto y en tal virtud, es inasegurable por mandato legal.

1. **IMPROCEDENCIA DE AFECTACIÓN DE LOS SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE ACREDITAR LA REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA RESPECTO DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO**

Para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva las pólizas. Dado que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, en tanto, (i) NO hay incumplimiento de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y, (ii) NO se ha acreditado la cuantía de la pérdida, toda vez que, no se demostró que la terminación de la vinculación obedeció a una injusta causa y mucho que obedeció a un despido ilegal, así como tampoco el perjuicio sufrido por el demandante; resulta consecuente entonces indicar que, las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 en virtud de las cuales se vincula a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., no puede hacerse efectiva para este caso.

En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“***ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.***

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad*.” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“*Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)*5 ” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente.

En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“*2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de las pólizas de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario*” (art. 1089, ib.)6”.

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro.  Así mismo, no cuantifica una pérdida.  De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios*7” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del código de comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

1. La no realización del Riesgo Asegurado

De conformidad con lo estipulado en las condiciones particulares de las PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante las pólizas en virtud de las cuales se vinculó a mi procurada al presente litigio, se concertó el siguiente amparo: “PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES”

Ahora bien, en este caso encontramos que el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales no puede afectarse en atención a que resulta claro que en ningún momento la afianzada FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA incumplió con el pago de dichos conceptos al señor BECERRA, ya que de acuerdo con la documental aportada el contrato de trabajo se terminó por mutuo acuerdo y su empleador le pagó los conceptos a los que tuvo derecho.

Dicho lo anterior y en virtud de la clara inexistencia de incumplimiento por parte de la persona afianzada, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. El demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique el incumplimiento a cargo del demandado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró. El riesgo fue descrito dentro de las condiciones de los contratos de seguros, de la siguiente manera:

 

Dicho lo anterior y en virtud de la clara inexistencia de incumplimiento por parte de la entidad afianzada, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. El demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique el incumplimiento a cargo del demandado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Así es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no se presentó incumplimiento por parte del contratista afianzado. Como consecuencia de ello, no hay obligación condicional por parte de la aseguradora.

1. Acreditación de la cuantía de la pérdida

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de pago alguno por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, toda vez que, primero, lo que cubre el contrato de seguro es el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivadas del incumplimiento imputable al contratista garantizado y, segundo, como consecuencia de las anteriores precisiones, resulta necesario que para afectar el amparo pretendido por el demandante, se acredite la cuantía de la pérdida, esto significa, acreditar que ese incumplimiento por parte de la sociedad afianzada le generó un daño perjuicio al demandante. Situación que, al NO haberla acreditado por parte del señor BECERRA, claramente NO puede afectarse el seguro.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida, que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento constitutivo de incumplimiento contractual por parte del afianzado en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y además que los amparos solo se predican de las relaciones derivadas de un contrato de trabajo. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía del valor reclamado, es necesario indicar que: 1. Los contratos de seguro cubren el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales imputables al contratista garantizado y 2. Para afectar el amparo aludido es necesario acreditar la cuantía de la pérdida, esto significa, acreditar que ese incumplimiento le generó un perjuicio que acarrea una indemnización, situación que NO se evidencia en este caso. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del código de comercio es claro que no ha nacido la obligación condicional del Asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **CONFIGURACIÓN DEL FENÓMENO JURÍDICO DE LA NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO POR LA RETICENCIA DEL AFIANZADO**

En este caso en particular, resulta plausible formular la presente excepción, bajo el entendido que, de encontrarse probado que la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA no declaró sinceramente los hechos o circunstancias que determinaban el estado del riesgo al pretender que mí representada asegurara – conforme a lo pactado en las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, las condiciones y obligaciones del contrato suscrito entre el afianzado y el demandante, se configuraría la nulidad relativa del contrato de seguro con ocasión a esa reticencia por parte del afianzado.

Al respecto, establece el artículo 1058 del código de comercio lo siguiente:

*“El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.*

*Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.*

*Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.*

*Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.”*

En conclusión, si se acredita que en efecto antes de la fecha inicio de la vigencia del seguro existía cualquier circunstancia que constituyera alguna eventual infracción a un derecho laboral, esa circunstancia debía ser avisada al asegurador, por ende, si no se avisó el contrato es nulo por reticencia. Por lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho, declara probada esta excepción.

1. **TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 COMO CONSECUENCIA DEL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO DE LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA EMITIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**

En el presente caso, sin perjuicio de la inexistente responsabilidad que pretende atribuirse a ICBF, de todos modos, se propone esta excepción, a fin de advertir al despacho que no podrá nacer la obligación indemnizatoria de mi representada si la entidad asegurada incumplió con su deber de verificar que el garantizado de la póliza estuviera cumpliendo con sus obligaciones patronales.

Advertido lo anterior, se debe precisar que si alguna de las garantías estipulada en la póliza es incumplida genera la exoneran de responsabilidad, en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, el cual prescribe:

*Artículo 1061. Definición de garantía. Se entenderá por garantía la promesa****en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia****, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho.*

***La garantía deberá constar en las pólizas o en los documentos accesorios a ella****. Podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de otorgarla.*

*La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo,****deberá cumplirse estrictamente****. En caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por terminado desde el momento de la infracción.*

Ahora, sobre el cumplimiento de las garantías, el doctor Andrés Ordóñez ha señalado:

“(…) *es fundamental dentro del desarrollo del contrato de seguro y, vale la pena repetir, es a través de este fenómeno de las garantías que se ha permitido a la parte aseguradora, imponer al asegurado ciertos deberes de conducta cuyo incumplimiento, así no tenga injerencia en el estado del riesgo, pueda determinar consecuencias tan graves como la nulidad y la terminación del contrato”.*

En razón a lo anterior, y comoquiera que, si se incumple una garantía, en este caso el deber que tenía la asegurada de verificar el cumplimiento de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA respecto de sus obligaciones patronales, dicho incumplimiento a la misma libera de obligación indemnizatoria a mi procurada, en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio.

1. **CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.**

Es un principio que rige el contrato de cumplimiento a favor de Entidades Estatales, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de el FNAncia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”[[8]](#footnote-9)*

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello por lo que aterrizando al caso en cuestión no es de recibo indemnizar el incumplimiento tal y como fue pretendido por la parte demandante.

Así las cosas, el carácter de los seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales y en general de cualquier seguro es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de demostrar el incumplimiento imputable al contratista, así como su cuantía y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo tiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto de aparentes sumas no ejecutadas que no han sido debidamente probadas, implicaría un enriquecimiento para el Demandante. Como quiera que el incumplimiento que se reclama en este caso fue el no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, sin embargo, la parte demandante no allega ningún soporte que acredite tal hecho. De modo que reconocer emolumento alguno por este concepto enriquecería a la parte Demandante puesto que vulneraría el carácter indemnizatorio que rige los contratos de seguro.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que el demandante solicita el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el presunto incumplimiento en el pago de aquellos por parte de su empleador, pero no se ha probado la veracidad del hecho, en ese sentido su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio. Lo anterior, por cuanto es inviable reconocer una suma que no se encuentra probada dentro del proceso. Máxime, cuando dicho incumplimiento no es atribuible ni al contratante ni al contratista, pues dicha entidad no hace parte de las pólizas.

1. **REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR CONMPENSACIONES**

Ante una remota y eventual condena en contra de mí representada, se debe analizar si en el caso del contrato afianzado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, existen saldos a favor del afianzado de las pólizas y del pago a cargo de mi representada se tendrá que disminuir en el monto de esa deuda.

En este sentido, cualquier pago a cargo de mi representada con relación a una eventual indemnización, se tendrá que disminuir en el monto que del afianzado tenga a su favor y en cualquier otro valor que se llegue a deber al contratista afianzado por parte del asegurado.

Lo anterior, de conformidad con lo con lo pactado en las condiciones generales de las Pólizas de Cumplimiento No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, que a su tenor literal rezan:

****

Solicito respetuosamente al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

1. **COEXISTENCIA DE SEGUROS**

Fundamento la presente excepción, en atención a lo preceptuado en el artículo 1092 del Código de Comercio en el cual se precisa cuándo se existan otros seguros de cumplimiento con las mismas coberturas la indemnización debe dividirse entre las aseguradoras en proporción al monto asegurado por cada una, sin superar la cuantía asumida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EC para el caso en concreto.

Al respecto, la norma en comento precisa que:

***“ARTÍCULO 1092. <INDEMNIZACIÓN EN CASO DE COEXISTENCIA DE SEGUROS>.*** *En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad.”*

En ese sentido, en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro mencionado el riesgo debe ser distribuido entre las compañías llamadas en garantía.

Así mismo, el artículo 1094 y 1095 del Código de Comercio precisa las condiciones de la coexistencia de seguros:

***“ARTÍCULO 1094. <PLURALIDAD O COEXISTENCIA DE SEGUROS-CONDICIONES>.****Hay pluralidad o coexistencia de seguros cuando éstos reúnan las condiciones siguientes:*

*1) Diversidad de aseguradores;*

*2) Identidad de asegurado;*

*3) Identidad de interés asegurado, y*

*4) Identidad de riesgo.”*

Aunado a ello, se deja presente que dentro del clausulado de la póliza se estipuló que:



Aunado a ello, dentro del caso de marras al existir una diversidad de aseguradoras que tiene como fin el interés de asegurar el contrato suscrito entre ICBF y el FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA habría lugar a la coexistencia de seguros.

En conclusión, para el caso en concreto existe una coexistencia de seguros por lo cual las asegurados llamadas en garantía deberán dividirse en proporción al monto asegurado por cada una el pago de una eventual obligación de indemnizar comoquiera que tienen la misma cobertura.

1. **EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.**

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que las pólizas que hoy nos ocupa, sí prestan cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de pagar los salarios y prestaciones sociales reclamadas por el actor, exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juez deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

***“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA****. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“*Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación,* ***el valor de la prestación a cargo de la aseguradora****, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños,* ***se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado****, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización*”[[9]](#footnote-10) *(Subrayado y negrilla fuera de texto original)*

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante, y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dichas pólizas contienen unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juez en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

1. **EXTENSIÓN DEL RIESGO POR PARTE DEL ASEGURADO ICBF**

Fundamento la presente excepción, teniendo en cuenta el requisito para que proceda la afectación de la Póliza de Cumplimiento No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 es la existencia del detrimento patrimonial de la sociedad ICBF, por el incumplimiento del afianzado la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Igualmente, en virtud del artículo 1074 del Código de Comercio, la sociedad ICBF, como asegurado en las pólizas tiene la obligación de evitar la extensión del riesgo y cito:

*‘’ARTÍCULO 1074. OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO: Ocurrido el siniestro,* ***el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas****. (Negrillas y subrayado fuera del texto original).*

Así mismo, el ICBF, en su calidad de supervisor de los contratos de aportes afianzados y también asegurado, le asiste la carga de vigilar todos los aspectos que conciernan al contrato garantizado, en este sentido, verificar que los trabajadores utilizados por la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA que prestan sus servicios en virtud de los contratos de aportes Nos. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073, se les fuera reconocido todas sus acreencias con el dinero producto del servicio prestado.

En este sentido, el artículo 1060 del Código Comercio establece:

*‘’ARTICULO 1060. MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS:* ***El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo****. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso lo del artículo*[*1058*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr032.html#1058)*, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.*

*(...)*

*Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.*

*La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero solo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada.”*

Así las cosas, una debida administración del riesgo y una adecuada notificación de las situaciones de los contratos afianzados, le permiten a la compañía aseguradora ajustar la prima o el contrato de seguro de acuerdo con las circunstancias. Por esta razón, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción, en el evento en que se demuestre que el asegurado incumplió su obligación de evitar la extensión y mantener el estado del riesgo.

1. **UBÉRRIMA BUENA FE EN LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO**

Esta excepción se fundamenta en el hecho de que el contrato de seguro se caracteriza por ser de *ubérrima buena fe*, significa que el asegurador parte de la base de que la información dada por el tomador es cierta. Por tanto, no se exige a la compañía aseguradora realizar una valoración detallada de los elementos constitutivos de todos los riesgos que opta asegurar; pues la aseguradora únicamente asume sus obligaciones basadas en el dicho del tomador, es decir, no le compete a la compañía cerciorarse si lo que afirma el afianzado de las pólizas es cierto o no.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-232 de 1997 del 15 de mayo de 1997 estableció:

*“Esta particular situación, consistente en quedar a la merced de la declaración de la contraparte y contratar, generalmente, en virtud de su sola palabra, es especial y distinta de la que se da en otros tipos contractuales, y origina una de las características clásicas del seguro: la de ser un contrato de ubérrima buena fe.*

*Aseverar que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei contractus, significa, ni más ni menos, sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es, llevadas al extremo’’.*

En el mismo sentido, el doctor Hernán Fabio López Blanco en su libro Comentarios a los contratos de Seguros-II edición manifiesta que:

“(...) *las empresas aseguradoras no están obligadas a realizar inspecciones de los riesgos para determinar si es cierto o no lo que el tomador asevera. El contrato de seguro, como contrato de ubérrima buena fe, no puede partir de la base errada de que es necesario verificar hasta la saciedad lo que el tomador afirma antes de contratar, porque jamás puede suponerse que él miente*.”

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC18563-2016 del 16 de diciembre del 2016, magistrado ponente el Doctor Álvaro Fernando García Restrepo, frente a la ubérrima de buena fe que caracteriza a los contratos de seguro ha indicado:

‘**’*La aseguradora actúa de acuerdo con la información dada por el tomador o asegurado la que debe considerarse fidedigna, y el hecho de que realice investigaciones es un punto que está a su libre arbitrio, y si no lo hace, tal conducta no puede justificar la falsedad del tomador del seguro’’****.* (Negrilla fuera del texto original)

Y sobre el mismo punto, indicó que en el hecho de exigir que las compañías aseguradoras realicen un estudio del riesgo, pese a la falsedad en la que muchas veces incurren los tomadores del seguro, implica justificar la mala fe del tomador. En este sentido manifestó:

*‘’El hecho de que el tomador o asegurado haya mentido en su declaración de asegurabilidad, ya de por sí implica reticencia que es causal de la nulidad, y si la compañía de buena fe acepta tal declaración, no puede señalarse que por tal conducta incurrió en una negligencia que implica la validez del contrato. De ninguna manera puede disculparse la mendacidad del tomador, ni aun con la falta de averiguación de la aseguradora, pues esta no es su obligación ante la declaración recibida’’.*

Por todo lo anterior, y traído al caso concreto, la compañía aseguradora solo se encuentra obligada a ser diligente en cuanto a la asesoría que le brinda al tomador o asegurado al momento de convenir el contrato de seguro de acuerdo a el estado del riesgo, pero su obligación no implica investigar la veracidad de dicho riesgo, pues como se ha dicho reiteradas oportunidades, en el contrato de seguro opera la ubérrima buena fe, es decir, se parte de que la información suministrada por el tomador del seguro es verdadera.

Así las cosas, teniendo en cuenta los riesgos que amparó mi representada para el presente caso, la compañía no se encuentra obligada a verificar previo a la celebración de los contratos de seguros, si efectivamente existe relación laboral la parte actora; y si realmente el demandante fue vinculado a prestar los servicios en virtud del contrato afianzado entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA y el ICBF, por cuanto como se manifestó, mi representada en calidad de aseguradora no está obligada a inspeccionar los riesgos amparados que contractualmente asumió en dicha póliza.

En consecuencia, la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., no está obligada a verificar la exactitud de la declaración del tomador de las pólizas en cuanto a su relación contractual con sus trabajadores, dado que el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe y no existe legislación que obligue a la compañía a efectuar dichas valoraciones con antelación a la celebración de los contratos de seguro. Por tanto, en el evento de comprobarse que no se reúnen los presupuestos bajo los cuales la compañía brindó el amparo, deberá excluirse de responsabilidad a mi representada por faltarse al principio de buena fe.

1. **SUBROGACIÓN**

Se formula esta excepción, en gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad alguna a cargo de mi procurada, ya que mi representada no tiene deber contractual de pagar una indemnización en este caso, pero en la improbable hipótesis que, con sujeción a las condiciones de las pólizas de cumplimiento, fuera condenada, pese a que el único beneficiario de las mismas es la sociedad ICBF, según la póliza y el régimen vigente, previamente tendría que comprobarse o establecerse que el demandante efectivamente prestara sus servicios para la ejecución del contrato afianzado con la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, y que en esa condición realizó tareas a su servicio, en ejecución de los contratos afianzados y además, que se cumplió la condición de la que pende la obligación de indemnizar, es decir que se produjo el incumplimiento de las obligaciones de la entidad afianzada, en el pago de salarios.

Luego sólo en el remoto evento de que las demandadas tengan que responder por los salarios de los trabajadores de la entidad afianzada, generados durante la vigencia de las pólizas y en ejecución de los contratos afianzados, sólo en ese caso mi procurada entraría a asumir, con base en el seguro y dentro del límite asegurado, sin perjuicio de todas las condiciones de las pólizas, incluso aquellas que la exoneran, su deber de asegurador al ICBF, indemnizando a dicha entidad, dentro del marco de las condiciones de la póliza por lo que a ella le toque pagar a los trabajadores de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, tal como se encuentra descrito en los contratos de seguro, de la siguiente manera:

**

En la hipótesis planteada en el párrafo anterior, una vez la compañía hubiere pagado al ICBF, lo que este deba pagar al demandante, como trabajador del afianzado, por ministerio de la ley operará la subrogación de los derechos que tiene la asegurada (Artículo 1096 Código de Comercio) contra el afianzado, por ser ésta la causante del siniestro, en cuanto incumplió con el pago de los salarios, prestaciones sociales que se estarían reclamando en este proceso.

Mi representada, entonces, en ese supuesto tendrá el derecho a repetir por lo que pague, contra la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, es decir, a recobrar lo que indemnice, si es que efectivamente se realizó el riesgo asegurado, de forma que en esta excepción se reconoce esa potestad de la aseguradora de exigir a su afianzada que asuma su obligación y le reembolse lo que haya pagado, siendo simplemente la expresión de la subrogación que por ministerio de la Ley se produce de los derechos que tiene su asegurada, debido a su condición de causante del siniestro por su incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales para con la parte actora, en cuanto ese incumplimiento obligue a la asegurada o en su lugar a su compañía aseguradora, mi representada, a pagar lo que en verdad le corresponde a al afianzado.

1. **PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO.**

Pese a que mi representada de ninguna manera está obligada al pago de suma alguna y sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de mi procurada, invoco como excepción la PRESCRIPCIÓN consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio.

“*Artículo 1081.* ***Prescripción de acciones:*** *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.****La prescripción ordinaria*** *será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.****La prescripción extraordinaria*** *será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes.*” (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

Se concluye que, al señalar la disposición transcrita los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distinguen entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en el caso a colación desde la notificación de la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria.

1. **GENÉRICA Y OTRAS.**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o a los contratos de seguro utilizados para convocar a mi representada al presente litigio.

**CAPÍTULO III.**

**HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA**

En el caso marras, el señor OMAR BECERRA LIBREROS inició proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN POR COLOMBIA, PORVENIR S.A., MUNICIPIO DE JAMUNDÍ-VALLE e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, pretendiendo en síntesis que: (I) Se declare la existencia de una relación laboral entre el señor BECERRA y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO, (ii) declarar la ineficacia o nulidad del acta por medio del cual se terminó la relación laboral, (iii) ordenar el reintegro laboral y consigo los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, pagos de aportes dejados de percibir y la indemnización de 180 días de salario.

Por otro lado, frente a PORVENIR solicita (i) ordenar liquidar cálculo actuarial, (ii) reconocimiento y pago de la pensión de invalidez junto con sus intereses y retroactivo.

Por consiguiente, el ICBF llamó en garantía a ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., en virtud de las pólizas de seguro de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003769 y 660-47-994000003767 y las Pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 en aras de que mi procurada actúe como garante de las condenas que se le imputen a la sociedad.

En este sentido, precisaremos los motivos por los cuales el Juez deberá desestimar las pretensiones de la demanda y las enunciadas en el llamamiento en garantía formulado por la sociedad ICBF, a mi representada:

1. **Frente a las pretensiones de la demanda:**
* Solicito absolver a mi asegurada y representada de las obligaciones que emanan de derechos que se encuentran extinguidos por el fenómeno de la prescripción, toda vez que, el vínculo laboral del demandante finalizó el 16/11/2012 y radicó la demanda el 05/06/2023 y la reclamación realizada a las aquí demandadas se realizó el 10/05/2023, es decir, cuando ya habían transcurridos los 3 años que precisa la ley.
* NO es posible que se predique la solidaridad que pretende el actora por cuanto no se acreditan los presupuestos contemplados en el artículo 34 del C.S.T., debiéndose resaltar que por expresa prohibición legal, el ICBF no puede contraer obligación laboral con los contratistas del contrato de aportes, máxime si se tiene en cuenta que los acuerdos celebrados entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el ICBF no hacen relación propiamente al contrato de obra que refiere la ley laboral sino al contrato especial de aporte, por lo que para consultar su definición y características debe estarse a lo contenido en sus propias normas, y si bien el ICBF participa en algunas decisiones a través de sus representantes, ello obviamente, tiene razón de ser en el seguimiento normal que la ley le ordena con relación a los aportes que a través de los contratos se realiza, para verificar que los recursos se utilicen para los fines perseguidos, concluyéndose así que los contratos de aportes se escapan de la esfera laboral, y por lo tanto, no le es aplicable las disposiciones del C.S.T., pues corresponden a contratos administrativos que se encuentran regulados por normas especiales de derecho público de conformidad con el Art. 129 del Decreto 2388 de 1979, motivo por el cual se descarta la mencionada solidaridad frente a las acreencias que se pretenden en la demanda.
* El señor BECERRA no tuvo una vinculación laboral al servicio del ICBF, por lo que no se configuró una subordinación en cabeza de aquel, asimismo se deja sentado que era su empleadora la FUNDACIÓN PRODESARROLLO quien impartía las mismas y en relación con la retribución salarial y pago de prestaciones sociales, era esta última sociedad la encargada de efectuar el reconocimiento y pago por dichos conceptos.
* Es totalmente evidente que el señor BECERRA no ha sido beneficiario del fuero por Estabilidad Laboral Reforzada, en el entendido que, de cara al precedente jurisprudencial trazado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta no logró probar que para la fecha que presuntamente le fue terminado el vínculo, padeciera deficiencias de mediano y largo plazo, ni que las mismas sean una barrera para ejecutar labores con normalidad e igualdad de condiciones que los demás trabajadores, ni mucho menos que tuviera restricciones laborales y que dicha circunstancia haya sido conocido por el empleador.
* No hay lugar al reconocimiento de las pretensiones incoadas por la parte demandante ya que, como bien se ha logrado demostrar, no ha mediado entre estas y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF un contrato de trabajo, siendo inexistente la solidaridad que se pretende predicar.
* Si se llegara a aceptar que alguno de los perjuicios se generó, la estimación que de su monto realiza la parte actora sólo refleja una desmedida e injustificada ambición para obtener un lucro injustificado, como se aprecia del examen de los supuestos de carácter material y extrapatrimonial.
* En el improbable evento de que prosperen las pretensiones de la demanda y se imponga alguna condena a la demandada, del monto de esta deberán deducirse o descontarse las sumas que ya fueron pagadas al demandante mediante el acuerdo de pago extraprocesal suscrito entre la FUNDACIÓN PRODESARROLLO y el señor OMAR BECERRA, en el cual se le canceló la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000).**
1. **Frente a las pretensiones del llamamiento en garantía:**
* El Despacho tendría que analizar que las Pólizas de Seguro expedidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., NO cubren temporalmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales causados con anterioridad al 14/12/2012 y con posterioridad al 30/12/2013 (se otorgan tres años más con relación a la fecha de finalización del contrato afianzado por la prescripción trienal), razón por la cual solo quedan cubiertos los hechos acaecidos en este lapso temporal así como tampoco los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio de vigencia de la póliza así el hecho se haya consumado en vigencia, dado que siguiendo los términos de los artículos 1057 y 1073 del Código de Comercio, mi procurada no estaría llamada a responder por los hechos acaecidos fuera de la vigencia de la póliza, así como tampoco por aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la vigencia y consumas en vigencia de estas, por lo que, teniendo en cuenta que el contrato laboral suscrito entre el señor BECERRA y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO finalizó el 16/11/2012, es decir, con anterioridad a la vigencia de las pólizas, existiendo así una falta de cobertura temporal.
* El riesgo que se amparó en el caso de las pólizas de cumplimiento concretamente es el que el ICBF deba responder por los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que estaba obligada la FUNDACIÓN PRODESARROLLO relacionado con los trabajadores utilizados por la sociedad garantizada en la ejecución de los contratos afianzados durante la vigencia de las pólizas sobre las cuales se erige el llamamiento en garantía a mi representada, **escenario que nos ubica en la situación en la cual debe probarse dentro del proceso que el demandante ejerció sus funciones en virtud de los contratos de aportes Nos. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 de lo contrario, aun cuando se probara la solidaridad de la asegurada en las pólizas no habría lugar a condenar a la compañía aseguradora.**
* Las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769 no prestan cobertura material y no podrán ser afectadas, como quiera que se estipuló que la aseguradora cubrirá a la entidad asegurada de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, se entiende entonces que: (i) Al no acreditar la solidaridad deprecada en el artículo 34 del C.S.T., no se genera un perjuicio para el asegurado de las pólizas y por ende, no se hace extensiva la condena al ICBF, y (ii) Al no imputársele una condena a quien funge como único asegurado, no hay lugar a que ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., asuma pagos de sociedades las cuales no fungen como aseguradas en las póliza emitidas.
* En las pólizas de cumplimiento se ampararon los eventuales incumplimientos que haya incurrido la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA respecto de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y que ello genere una consecuencia negativa para ICBF. En ese orden de ideas, el riesgo que se ampara por medio de las pólizas es la afectación que llegaré a sufrir el patrimonio del ICBF ante la declaratoria del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que hubiere incumplido el contratista, de cara a los trabajadores que aquel vincule para la ejecución del contrato afianzado, excluyéndose así las obligaciones derivadas de un vínculo laboral entre el asegurado y la aquí demandante.
* Los riesgos que se ampararon, en el caso de las pólizas de seguro, concretamente son el pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, amparo el cual operaría en el evento en el que el ICBF deba responder por aquellos rubros a que estaba obligado la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, relacionado con los trabajadores utilizados por dicha sociedad, en la ejecución del contrato afianzado, durante la vigencia de las pólizas, más NO debe asumir el pago de aportes a pensión, sanciones moratorias, vacaciones, indexaciones, costas, agencias en derecho, entre otras.
* No podría el fallador afectar las pólizas de RCE No. 660-74-994000001430 Y 660-74-994000001428 en caso de una condena, puesto que, como se mencionó la misma no cubre lo pretendido por la parte demandante pues, solo tiene cobertura frente a la responsabilidad civil extracontractual.
* No hay lugar a dudas que el pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA a sus trabajadores, por fuera de la vigencia que prestan las pólizas No. 660-47-994000003767 y 660-47-994000003769, no constituye un hecho incierto y en tal virtud, es inasegurable por mandato legal.
* Para el caso en estudio debe señalarse en primera medida, que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento constitutivo de incumplimiento contractual por parte del afianzado en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y además que los amparos solo se predican de las relaciones derivadas de un contrato de trabajo. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía del valor reclamado, es necesario indicar que: 1. Los contratos de seguro cubren el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales imputables al contratista garantizado y 2. Para afectar el amparo aludido es necesario acreditar la cuantía de la pérdida, esto significa, acreditar que ese incumplimiento le generó un perjuicio que acarrea una indemnización, situación que NO se evidencia en este caso. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del código de comercio es claro que no ha nacido la obligación condicional del Asegurador.
* Si se acredita que en efecto antes de la fecha inicio de la vigencia del seguro existía cualquier circunstancia que constituyera alguna eventual infracción a un derecho laboral, esa circunstancia debía ser avisada al asegurador, por ende, si no se avisó el contrato es nulo por reticencia.
* Si se incumple una garantía, en este caso el deber que tenía la asegurada de verificar el cumplimiento de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA respecto de sus obligaciones patronales, dicho incumplimiento a la misma libera de obligación indemnizatoria a mi procurada, en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio.
* Teniendo en cuenta que el demandante solicita el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el presunto incumplimiento en el pago de aquellos por parte de su empleador, pero no se ha probado la veracidad del hecho, en ese sentido su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio. Lo anterior, por cuanto es inviable reconocer una suma que no se encuentra probada dentro del proceso. Máxime, cuando dicho incumplimiento no es atribuible ni al contratante ni al contratista, pues dicha entidad no hace parte de las pólizas.
* Ante una remota y eventual condena en contra de mí representada, se debe analizar si en el caso del contrato afianzado entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, existen saldos a favor del afianzado de las pólizas y del pago a cargo de mi representada se tendrá que disminuir en el monto de esa deuda.
* Para el caso en concreto existe una coexistencia de seguros por lo cual las asegurados llamadas en garantía deberán dividirse en proporción al monto asegurado por cada una el pago de una eventual obligación de indemnizar comoquiera que tienen la misma cobertura.
* Comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dichas pólizas contienen unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juez en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.
* Una debida administración del riesgo y una adecuada notificación de las situaciones de los contratos afianzados, le permiten a la compañía aseguradora ajustar la prima o el contrato de seguro de acuerdo con las circunstancias. Por esta razón, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción, en el evento en que se demuestre que el asegurado incumplió su obligación de evitar la extensión y mantener el estado del riesgo.
* La ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., no está obligada a verificar la exactitud de la declaración del tomador de las pólizas en cuanto a su relación contractual con sus trabajadores, dado que el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe y no existe legislación que obligue a la compañía a efectuar dichas valoraciones con antelación a la celebración de los contratos de seguro. Por tanto, en el evento de comprobarse que no se reúnen los presupuestos bajo los cuales la compañía brindó el amparo, deberá excluirse de responsabilidad a mi representada por faltarse al principio de buena fe.
* Mi representada, tendrá el derecho a repetir por lo que pague, contra la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, es decir, a recobrar lo que indemnice, si es que efectivamente se realizó el riesgo asegurado, de forma que en esta excepción se reconoce esa potestad de la aseguradora de exigir a su afianzada que asuma su obligación y le reembolse lo que haya pagado, siendo simplemente la expresión de la subrogación que por ministerio de la Ley se produce de los derechos que tiene su asegurada, debido a su condición de causante del siniestro por su incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales para con la parte actora, en cuanto ese incumplimiento obligue a la asegurada o en su lugar a su compañía aseguradora, mi representada, a pagar lo que en verdad le corresponde a al afianzado.
* Para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distinguen entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en el caso a colación desde la notificación de la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria.

**CAPÍTULO IV**

**MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes:

# DOCUMENTALES

Ténganse como pruebas las que obran en el expediente y adicionalmente, solicito se tengan como pruebas las siguientes:

* 1. Copia de la caratula, anexos y las condiciones generales de las pólizas de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 660-47-994000003769 y 660-47-994000003767 emitidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.
	2. Copia de la caratula, anexos y las condiciones generales de la póliza de RCE No. 660-74-994000001430 y 660-74-994000001428 emitidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.
	3. Derecho de petición dirigido a la sociedad ICBF y copia del correo electrónico mediante el cual se remitió.

# INTERROGATORIO DE PARTE AL DEMANDANTE y AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA,

* 1. Ruego ordenar y hacer comparecer al señor OMAR BECERRA para que en audiencia absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito les formularé sobre los hechos de la demanda.
	2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio al representante legal de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, a fin de que conteste el interrogatorio que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio.
1. **INFORME JURAMENTADO**

De conformidad con el artículo 195 del C.G.P., solicito respetuosamente al despacho practicar informe juramentado al Representante Legal del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a quien ostente dicha calidad al momento de la práctica de la prueba, para que en absuelva el cuestionario escrito que le formularé sobre los hechos de la demanda.

1. **TESTIMONIALES**

Comedidamente solicito fijar fecha y hora para que se recepcione el testimonio de la Doctora VALENTINA OROZCO ARCE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.176.752 quién podrá citarse al correo electrónico valenorozcoarce@gmail.com y quien funge como asesora externa de mi representada, con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos en que se fundamentan las excepciones propuestas, la disponibilidad de la suma asegurada, el alcance de la cobertura otorgada y las exclusiones de las pólizas de seguro que fue utilizado como fundamento de la convocatoria formulada.

1. **OFICIOS**

Respetuosamente solicita al Despacho, se oficie al ICBF, exhibir y certificar si de los contratos de Aporte No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073, suscritos entre el ICBF y la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, existen saldos a favor del afianzado. De igual forma que se aporten todas las reclamaciones administrativas que haya realizado el demandante ante ICBF, ello para acreditar si existe una prescripción ordinaria del seguro.

Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que no fue posible obtener esta información por vía del Derecho de Petición que fue efectivamente radicado ante la mencionada entidad en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 10 del artículo 78 del C.G.P.

El propósito de esta prueba es conocer si de los contratos de Aporte No. 76.26.12.1078 y 76.26.12.1073 afianzados por mi asegurada, existen saldos pendientes a favor de la FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA, en aras de determinar si es posible la aplicación de la cláusula No. 7 del condicionado general de las pólizas de cumplimiento.

ICBF podrá ser notificado al correo electrónico: notificaciones.judiciales@icbf.gov.co

**CAPÍTULO V**

**ANEXOS**

1. Certificado de Cámara y Comercio de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.
2. Poder especial conferido y remitido al correo electrónico
3. Cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito.
4. Los documentos aducidos como pruebas.

**CAPÍTULO VI**

**NOTIFICACIONES**

* La parte demandante podrá ser notificada a la siguiente dirección electrónica: yth\_gamba@hotmail.com
* La parte demandada: ICBF a los correos electrónicos: : notificaciones.judiciales@icbf.gov.co - maria.salasg@icbf.gov.co - FUNDACIÓN PRODESARROLLO al correo electrónico fundacionprodesarrollocomunitario@hotmail.com – PORVENIR S.A. al correo electrónico notificacionesjudiciales@porvenir.com.co – MUNICIPIO DE JAMUNDÍ al correo electrónico notificacionjudicial@jamundi.gov.co
* El suscrito y mi representada en la secretaria de su despacho, en la Avenida 6ABis No.35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali y en el correo electrónico notificaciones@gha.com.co



Del señor Juez;

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. del C.S. de la J.

1. Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. [↑](#footnote-ref-3)
3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, sentencia del diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth, radicado: 25000-23-26-000-2000-02019- 01(25472). [↑](#footnote-ref-4)
4. Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2000-02019-01(25472). Consejera Ponente: Danilo Rojas Betancourth. [↑](#footnote-ref-5)
5. Corte Suprema de Justicia. SC3893 de 2020. Radicación 2015-00826. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-6)
6. Consejo de Estado, sentencia 2002-05455 de junio 16 de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo -sección primera-, Rad. 76001-23-31-000-2002-05455-01. Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno [↑](#footnote-ref-7)
7. Sentencia de 15 de junio de 2016, SC7814-2016, Radicación No. 05001-31-03-010-2007-00072-01. M.P Luis Armando Tolosa Villabona. [↑](#footnote-ref-8)
8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-9)
9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-10)